

Oriente antioqueño: Análisis de la conflictividad



Área de paz,
desarrollo y
reconciliación



Bruno Moro
Representante Residente, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

María del Carmen Sacasa
Directora de País A.I.

Elaborado por
Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Alessandro Preti
Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación

Olga González Reyes
Astrid Elena Villegas
Unidad de Análisis

Carlos Iván Lopera
Jorge Iván Rincón
Oficina territorial del Oriente antioqueño

Fotografía de portada:
Emiro Marín Carvajal

Reconocimiento especial
Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación del PNUD,
Nueva York (BCPR, por su sigla en inglés)

Agradecimientos
Emiro Marín C., Inforiente.
Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente antioqueño.

Diseño, impresión y acabados
Impresol PBX: 2508244
www.impresolediciones.com

Documento de trabajo de PNUD
para su uso interno

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan
necesariamente las opiniones del PNUD, su junta directiva,
ni los Estados miembros.

Junio de 2010



El análisis que se presenta a continuación se basa en entrevistas realizadas en el territorio en el marco del proceso de investigación participativa denominado "Capacidades locales de paz en Oriente antioqueño" de la Corporación Justicia y Paz y el proyecto ART - REDES DEL PNUD, actualmente en proceso de publicación. También fueron de utilidad otras investigaciones sobre la región.

Su elaboración sigue la metodología "Análisis del desarrollo relacionado con el conflicto" (Conflict-related Development Analysis - CDA, por su sigla en inglés), herramienta preparada por la Dirección para la Prevención de Crisis y la Recuperación del PNUD (Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR), utilizada en diferentes países del mundo.



Contenido

4 Antecedentes

5 Las causas estructurales y coyunturales y los actores

5 Confrontaciones derivadas del cambio de fuente de producción

De la agricultura campesina a los megaproyectos

9 Entre la hegemonía y los movimientos cívicos

12 Confrontación de los grupos armados

18 Actores locales de paz y sus capacidades de construcción de paz

24 Situación actual y dinámicas

24 Estancamiento en el desarrollo humano

26 La recuperación social del territorio

27 La presencia de actores armados en la región

30 Los actores armados en la política y la gobernabilidad local

31 Las manifestaciones de la violencia

46 Escenarios posibles y tendencias

46 La difícil situación humanitaria tiende a continuar

47 Procesos hacia el restablecimiento de la población
y garantías de los derechos de las víctimas

48 Se reafirma la intervención cívico-militar

48 La presencia de los actores armados tiende a continuar

49 La gobernabilidad, entre los movimientos cívicos y la presión armada

50 Identificación de caminos a seguir

50 Transformación de conflictos, cultura de paz, prevención y
mitigación de efectos del conflicto

51 Verdad, justicia, reparación y derechos humanos

52 Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz

53 Desarrollo social y económico sostenible para la paz

1. Antecedentes



La región de Oriente, en el departamento de Antioquia, comprende 23 municipios que ocupan un territorio de 7.021 km². Cuenta con una población de 522.819 habitantes, según el censo de 2005, de los cuales el 55% vive en las zonas urbanas y el 45% en las zonas rurales. Es una zona rica en diversidad biofísica y en aguas, con las cuencas de los ríos Nare, Río Negro, El Buey, Calderas, Ríoclaro, Samaná Norte y Samaná Sur.

Los 23 municipios están distribuidos en cuatro subregiones:

Altiplano: abarca los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla, Guarne, Santuario, San Vicente, La Unión y El Retiro. Concentra el 60% de la población. Es la subregión más desarrollada del Oriente, especialmente en las áreas de servicios, industria y comercio y, en menor medida, en la producción tecnificada de agricultura.

Embalses: con los municipios de Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael. Vio buena parte de sus tierras agrícolas inundadas por la construcción de embalses para la generación de energía hidroeléctrica. Por esto, la economía campesina, que era la vocación de su población, decayó y fue cambiada por el turismo.

Páramo: La conforman Abejorral, Sonsón, Nariño y Argelia. El 66,6% es una población principalmente rural que vive de la agricultura y cultiva café, panela, papa, frijol, maíz, frutales y ganado de leche.

Bosques: comprende los municipios de Cocorná, San Francisco y San Luis. Esta subregión es esencialmente rural (70,7% de la población) y combina la economía campesina, la silvicultura y el comercio informal, pues es atravesada por la autopista Medellín-Bogotá.

En la región del Oriente antioqueño se encuentran dos zonas diferenciadas por su distancia física, pero también por sus características culturales: el Oriente cercano y el Oriente lejano. El Oriente cercano tuvo a lo largo de varias décadas dos grandes centros de poder económico y político: Marinilla y Rionegro, ambos con fuerte influencia de la Iglesia, el Partido Conservador y las élites locales, que moldearon un tipo de sociedad cohesionada social y políticamente. Aunque Marinilla se identificaba políticamente como conservador y Rionegro como liberal, ambos impulsaron el desarrollo del comercio, la industria y la agricultura.

El Oriente lejano tuvo una colonización más dispersa, que conformó una estructura social con menores niveles de organización y mayores posibilidades de independencia. Estos territorios sirvieron de refugio a los indígenas de los resguardos de El Peñol, San Antonio de Pereira y Sabaletas, así como a los campesinos desposeídos de sus tierras por los hacendados dueños de haciendas ganaderas. Allí, la violencia de mediados de siglo XX tuvo un notable impacto por la presencia de “Los Pájaros” y la “chusma liberal”, que se enfrentaron en una guerra de 15 años.

El Oriente lejano empieza a adquirir importancia económica a partir de la década de 1960 con la construcción de las hidroeléctricas de Guatapé, San Carlos, de Jaguas y Calderas, la extensión de las líneas de energía y la construcción de la autopista Medellín-Bogotá. En la actualidad, el Oriente antioqueño junto con el Magdalena generan el 25% de la energía del país. Sin embargo, el manejo excluyente que se ha dado a estos proyectos los ha convertido en fuente de conflicto.

2. Las causas estructurales y coyunturales y los actores

Confrontaciones derivadas del cambio de fuente de producción. De la agricultura campesina a los megaproyectos

Desde la década de 1960, el Oriente antioqueño empezó a ser centro de proyectos de modernización e industrialización. A la amplia región de minifundios agrícolas que era el

Altiplano fueron llegando nuevos proyectos productivos que causaron cambios radicales para la vida de la población. Algunos de estos cambios se convirtieron en causa de un fuerte conflicto.

Inicialmente fue la industrialización, que se engendró en Rionegro. Esto trajo transformaciones en el entorno y en la dinámica social y económica del Altiplano con la vinculación de buena parte de la población al trabajo en las fábricas y la llegada a la región de centenares de familias en busca de empleo.

Tales circunstancias aceleraron la urbanización de Rionegro y los municipios cercanos y, además, se desbordó la capacidad para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes. Al mismo tiempo, numerosas familias de clase alta y media-alta invirtieron en la región comprando fincas de recreo, lo que cambió la vocación de la tierra y elevó sus precios.

A partir de 1970, como parte de la búsqueda de salidas a la crisis energética que afrontaba el país, se determinó el Oriente como sede de distintas centrales hidroeléctricas que aprovecharían las riquezas hídricas naturales de la cuenca del río Nare.

Los cambios de población ocurridos a raíz de la construcción de los embalses sobre las tierras de los campesinos y de la autopista Medellín-Bogotá trajeron situaciones que afectaron seriamente a la población local.

“Uno de los municipios más afectados fue El Peñol, cuyo casco urbano fue trasladado en su totalidad. En 1970 se dieron inundaciones en las zonas rurales del municipio y ocho años después esta situación se presentaba en el área urbana. La comunidad se enfrentó a la reubicación en nuevas tierras, la urbanización de El Nuevo Peñol y a cambios sociolaborales¹.

De repente la pequeña localidad se vio invadida de maquinaria pesada y de numerosos foráneos. Se vivió la especulación en la compra y venta de tierras, paros de protesta, trabajo en masa para pobladores y emigración de otros, un giro en la economía local e incremento de la población”².

Guatapé fue otro de los municipios afectados. Su vida y paisaje dieron un giro radical con la construcción de la central hidroeléctrica de Guatapé. Muchos propietarios vendieron sus tierras para el embalse y la hidroeléctrica y se desplazaron hacia la Costa, los Llanos y el Eje Cafetero.

Los campesinos de los municipios inundados vieron acabada su producción agrícola y migraron hacia Medellín y otras zonas del país. Los minifundistas que se trasladaron a las cabeceras municipales tenían que competir en desventaja –debido a su desadaptación al



1 Tomado de “Capacidades locales de paz en el Oriente antioqueño”, documento en proceso de publicación, del proyecto ART - REDES del PNUD y la Corporación Justicia y Paz.

2 *Ibidem*.

medio urbano– con todas las familias que llegaban en busca de empleo ante el boom de la industrialización.

Estos cambios en la composición demográfica de la población contribuyeron al resquebrajamiento de los lazos de cohesión social fundados en las relaciones de compadrazgo y vecindad y un cambio en las tradiciones y costumbres pueblerinas hacia estilos de vida más urbanos³.

Para 1997, la mitad de la población de la subregión de Embalses se concentra en los cascos urbanos. El 49% son jóvenes con 17 años de edad, seguidos de niños entre 12 y 17 años.

“Se trata de una generación de jóvenes que no encuentra oportunidades de educación ni de empleo y para los cuales no deja de constituir un atractivo la aventura en las filas de la guerrilla que desde los años 70 dio los primeros pasos en un proceso de penetración en el área rural de varios de los municipios afectados por las obras hidroeléctricas como Guatapé, Granada y San Carlos”⁴.

La construcción de la autopista Medellín – Bogotá, por otra parte, atravesó como una espada el centro del territorio de Cocorná, separando a su corregimiento San Francisco con una gran herida que rompió sus dinámicas culturales y lo aisló de su cabecera municipal. Su construcción también aisló a otros municipios como Sonsón y Nariño que hacían parte de la vía que comunicaba a la ciudad de Medellín con la capital del país, pero permitió también mejorar las vías de acceso a municipios como Granada, San Luis y Cocorná.

Para el año 1985 fue inaugurado el aeropuerto José María Córdoba, que también empezó a generar cambios en la dinámica regional, abriendo las puertas al mundo y proponiendo nuevos liderazgos a la región, al menos en la parte de infraestructura. Ahora, el Oriente antioqueño articula el sistema eléctrico y energético nacional: posee seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas) que generan el 29% de la energía nacional y el 73% del total departamental, según el documento “Capacidades locales de paz en el Oriente antioqueño”, del proyecto ART - REDES DEL PNUD y la Corporación Justicia y Paz. La construcción de la autopista, el aeropuerto y los embalses ha creado efectos significativos entre los cuales se pueden señalar⁵:

- ▶ Las poblaciones pueden tener una comunicación directa con Medellín.
- ▶ Gran parte de las industrias, principalmente la textil, se instaló en el Oriente, generó empleo y extendió su radio de producción y distribución.
- ▶ Mejoraron algunas vías rurales e intermunicipales.

3 Uribe de Hincapié, María Teresa (directora de investigación) (2001). *Desplazamiento forzado en Antioquia*. Secretariado Nacional de Pastoral Social y Universidad de Antioquia.

4 *Ibidem*.

5 Tomado de “Capacidades locales de paz en el Oriente antioqueño”, documento en proceso de publicación, del proyecto ART - Redes del PNUD y la Corporación Justicia y Paz.

- ▶ Se aceleró la tecnificación de la mano de obra local para cubrir la demanda laboral, técnica y profesional de los nuevos mercados e industrias que se instalan en la zona.

Pero, al mismo tiempo, provocó desplazamientos y cambios sociolaborales en las comunidades campesinas de tradición agrícola y ganadera, que trajeron para ellas grandes traumatismos.

Un modelo de desarrollo puesto en cuestión

Los campesinos se vieron afectados a raíz del proceso de industrialización y de la construcción de las hidroeléctricas y de la autopista. Por una parte, porque dejar el campo era más que dejar su alimento y su trabajo. En torno a la economía campesina se habían tejido también su identidad, su cultura y sus formas de socialización.

Por otro lado, porque estos megaproyectos, que provocaron una gran inversión económica, fueron diseñados desde Medellín –la capital del departamento–, sin tener en cuenta a los pobladores de los municipios en los cuales se desarrollarían⁶.

Con posterioridad se hicieron algunos acuerdos con la ciudadanía para paliar los efectos de estas construcciones. Sin embargo, las obras avanzaban y la ciudadanía “no veía cumplidas las promesas consignadas en los planes maestros acordados por las administraciones municipales, las empresas de servicios, las firmas constructoras y las mismas comunidades”⁷.

Al malestar de la gente tanto por la implementación de decisiones inconsultas que ponían en evidencia una histórica exclusión política y la inequidad en el manejo del poder y de los recursos, así como por el incumplimiento de los acuerdos, se sumó la intención del Estado de cobrarles un impuesto de valorización. La reacción no se hizo esperar. Los habitantes se organizaron e iniciaron una fuerte movilización para defenderse. Una de sus posiciones fue negarse a pagar los costos de la valorización.

Las comunidades de los municipios de Marinilla, El Peñol y Rionegro fueron las protagonistas de un primer ciclo de protestas. La idea del desarrollo centrada en el crecimiento económico fue un tema de disputa y de emergencia de acciones colectivas en contra del Circuito Eléctrico de Oriente. El aumento en las tarifas de los servicios de energía se convirtió en el aglutinante de voluntades, que permitió la expansión de la acción colectiva contestataria desarrollada en Marinilla, por el Oriente, haciendo surgir un movimiento social de repercusiones importantes para la configuración de una nueva fuerza política en el Oriente Antioqueño.



6 Hincapié Jiménez, Sandra Miled (2008). *Democracia y poder constituyente, Movimiento Constituyente de Antioquia*. Instituto Popular de Capacitación, IPC.

7 Tomado de “Capacidades locales de paz en el Oriente antioqueño”, documento en proceso de publicación, del proyecto ART - REDES DEL PNUD y la Corporación Justicia y Paz.

A través de asambleas populares y juntas cívicas se creó el Movimiento Cívico del Oriente, compuesto por campesinos, comerciantes, obreros, estudiantes y maestros. Fue un espacio democrático para la reivindicación de sus derechos y la construcción alternativa de nuevos liderazgos sociales y políticos⁸.

El desarrollo traído por los megaproyectos no redujo las desigualdades sociales ni modernizó la sociedad antioqueña. El crecimiento manufacturero no generó suficientes oportunidades de empleo en el área metropolitana para los campesinos sin trabajo en el campo. El turismo, que se esperaba fuera la principal actividad económica al cambiar la vocación productiva de los campesinos, se vio afectado por la llegada de los grupos armados. Este cambio de vocación productiva, a su vez, aumentó los niveles de inequidad, pues se fomentó el turismo en el cercano Oriente, que tiene mayor desarrollo, mas no en el lejano Oriente, donde se concentran los mayores niveles de pobreza.

El descontento de la población de El Peñol, Guatapé, San Rafael y San Carlos con la construcción de las hidroeléctricas fue el punto de partida de una dinámica de movilización y organización durante la década de 1960 con el propósito de obtener la debida reparación por los perjuicios causados.

Entre la hegemonía y los movimientos cívicos

Las dinámicas sociales y políticas del Oriente antioqueño han estado enmarcadas en una historia en la que han predominado los intereses de una élite altamente religiosa, carismática y profundamente conservadora en sus costumbres. También por tradición, la sociedad del Oriente se ha identificado casi monolíticamente con el ideario conservador. Esa identidad política los llevó a enfrentar fuertemente a los liberales en la denominada época de La Violencia, que abarcó buena parte del país.

Los actores de esa élite hegemónica eran las clases poderosas de Rionegro y Sonsón, que rivalizaban por ser la capital religiosa de la región, y las de Marinilla, que pugnaban con Rionegro por el poder político.

Mientras tanto, una parte de la población habitaba en condiciones de pobreza y marginalidad, en una gran brecha de inequidad con las clases altas, que se puede observar en las grandes diferencias que hay en el indicador de necesidades básicas insatisfechas de 1993 (cuadro 1).

⁸ Hincapié Jiménez, Sandra Miled. *Op cit.*

Cuadro 1. Necesidades básicas insatisfechas, Oriente antioqueño en 1993	
Rionegro	17,57 %
La Ceja	20,45 %
Retiro	25,94 %
Guatapé	26,55 %
La Unión	28,45 %
Marinilla	29,39 %
Santuario	31,72 %
Peñol	32,93 %
Sonson	34,93 %
Carmen de Viboral	35,39 %
Guarne	35,92 %
Abejorral	43,61 %
Granada	46,03 %
Nariño	50,03 %
Concepción	51,71 %
San Carlos	53,60 %
San Vicente	56,27 %
Aleandría	56,46 %
San Rafael	57,78 %
San Luis	58,25 %
Argelia	59,90 %
Cocorná	62,08 %
San Francisco	76,57 %

Fuente: DANE.

Estas condiciones de exclusión política, económica y social dieron origen en los años 70 a la creación de movimientos y organizaciones cívicas para defender los intereses de quienes habían permanecido excluidos de estos poderes. Los más importantes fueron el Movimiento Cívico del Oriente y las asambleas comunitarias, que más tarde dieron origen a la Asamblea Provincial del Oriente.

Arremetida contra los movimientos cívicos

Más allá de las protestas por la construcción de los embalses para la producción de energía hidroeléctrica, el Movimiento Cívico del Oriente impulsó “la formación de una generación de líderes cívicos independientes de los partidos tradicionales, la valoración de las acciones colectivas y una conciencia de región frente a la injerencia de los poderes centrales”⁹.

⁹ Uribe de Hincapié, María Teresa (directora de investigación). Op. cit.



De esta manera, las protestas por los modelos de desarrollo impuestos por intereses económicos y políticos de las élites antioqueñas ayudaron a la configuración de un claro sentimiento de identidad de la región y de la necesidad de la autodeterminación y construcción del propio desarrollo.

La importancia de las acciones colectivas del Movimiento Cívico está estrechamente vinculada con la formación de cuadros políticos populares alejados del bipartidismo oficial, con un sentido de pertenencia hacia la región y con una visión de desarrollo que consulta y representa los intereses de los habitantes del territorio.

“El Movimiento Cívico del Oriente fue la muestra más reveladora de la acción colectiva en un período de auge; la protesta levantó la bandera contrahegemónica frente a las formas en que las élites políticas y económicas llevaron adelante sus proyectos en los diferentes municipios del Oriente”¹⁰.

Así, el Movimiento Cívico produjo otra gran transformación en la región: la participación en la escena política de los líderes cívicos como candidatos a alcaldías y concejos en las elecciones de 1988. El Movimiento de Acción Peñolita ganó las elecciones a la Alcaldía de El Peñol y otros movimientos cívicos accedieron a los concejos de Guatapé y San Rafael.

Con la apuesta del Movimiento Cívico, la ciudadanía del Oriente Antioqueño encontró en este tipo de acción colectiva la forma de hacerse notar frente a un Gobierno y un Estado que no la tenía en cuenta en la toma de decisiones. Sin embargo, el Movimiento fue duramente atacado con una guerra sucia que dejó una larga lista de sus integrantes asesinados. Por esta arremetida, el Movimiento fue debilitado y el ciclo de protestas terminó abruptamente con el asesinato del más importante dirigente cívico, Ramón Emilio Arcila, el candidato más opcionado en ese momento a la Alcaldía de Marinilla. Esto determinó el declive de la lucha de los líderes y permitió que la clase política hegemónica continuara guiando los destinos del Oriente.

Fueron aquellos municipios donde los movimientos cívicos tuvieron una participación destacada en las elecciones, como El Peñol y Marinilla, donde precisamente los actores de la violencia política centraron su acción contra las nuevas iniciativas políticas.

“En San Carlos el triunfo electoral del Movimiento Cívico desde mediados de los ochenta generó la represión armada: En sólo 34 meses –entre enero de 1998 y octubre de 1991– 66 miembros de organizaciones cívicas fueron asesinados, hubo siete desaparecidos y 17 amenazados”¹¹.

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ Velásquez, Fabio (coordinador) (2009). *Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos. Foro por Colombia - GTZ.*

La casi totalidad de los candidatos políticos de izquierda y de los dirigentes cívicos fue blanco de atentados, que destruyeron el impulso ciudadano transformador que había marcado su autonomía frente a la guerrilla, así como frente a los partidos tradicionales y los de izquierda.

La mayoría de estas acciones contra el movimiento cívico fueron cometidas por los paramilitares en su estrategia contra los líderes cívicos y contra personas estigmatizadas como afines a la insurgencia.

A esta dinámica se sumó la fuerte violencia política de la que fue víctima el movimiento político de la Unión Patriótica en los años 80 y que se reflejó también en el Oriente antioqueño, donde se produjo el exterminio de esta fuerza política de izquierda mediante acciones cometidas por algunos miembros de la fuerza pública en asocio con paramilitares.

Según la investigación realizada por Pastoral Social y la Universidad de Antioquia¹², “el 27 de enero de 1988 en San Rafael, en las veredas El Silencio y El Topacio, el Ejército arrasó las cooperativas promovidas por la Unión Patriótica”.

La violencia que azotó la región en la década de los años 80 “desdibujó las diferencias entre el lejano y el cercano Oriente y contribuyó a la generalización de un ambiente de inseguridad e incertidumbre ante el futuro con repercusiones en las actividades económicas y en los lazos de cohesión de sus habitantes”¹³.

Fue en ese escenario que nació la Asamblea Provincial Constituyente, como una nueva propuesta para romper la hegemonía que había gobernado en el departamento y para abrir espacios a la diferencia de opiniones y corrientes políticas sin que fuera acallada por las armas. Desde su nacimiento, se entendió como una iniciativa para recomponer y cohesionar liderazgos desaparecidos; a lo largo de los años se ha nutrido de nuevos líderes en la búsqueda de una salida al conflicto armado y lidera acciones en el fortalecimiento de una democracia con un modelo de desarrollo concertado, incluyente y justo.

Confrontación de los grupos armados

La presencia de los grupos armados en la región aumentó de manera considerable la violencia que se presentaba contra los movimientos cívicos. En los años 80 la guerrilla hizo presencia y en los 90 aparecieron los grupos paramilitares.

La guerrilla en el Oriente

La llegada de las FARC al Oriente antioqueño es una continuidad de su presencia en el Urabá antioqueño. El Oriente, que era zona de retaguardia, donde sus miembros venían



12 Uribe de Hincapié, María Teresa (directora de investigación). *Op. cit.*

13 *Ibídem.*

a replegarse, ya fuera en temporadas de descanso, a recibir atención médica o a hacer proselitismo, pasó a ser zona de confrontación bélica cuando la arremetida paramilitar en Urabá obligó al repliegue de la guerrilla.

Así, a comienzos de la década de los 80 las FARC se hacen activas en el Oriente, con el frente IX, que se asentó en San Rafael y San Carlos y luego se extendió a San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría; y con el frente 47, que empezó a operar en el sur de la región, en Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco. Esto desató una época de combates con el Ejército en las áreas rurales de estos municipios.

La actividad de la guerrilla se manifestó en homicidios, secuestros, tomas de pueblos –entre las cuales son un hito las de Nariño y la de Granada–, desaparición forzada de personas, siembra de minas, desplazamiento forzado y terror en la autopista Medellín-Bogotá, sobre la que realizaban retenes ilegales conocidos como “pescas milagrosas”.

Los combates entre el Ejército y las FARC en San Rafael provocaron el desplazamiento de 250 campesinos hacia la cabecera en 2001.

A comienzos de 1990, el ELN hizo presencia en la zona de Embalses con el frente Carlos Alirio Buitrago, y desde allí se expandió a la zona de Bosques, en San Luis y Cocorná. Varios investigadores de la región refieren la construcción de los embalses como uno de los factores que motivó a las guerrillas de las FARC y el ELN a instalarse en esta región, debido, por una parte, a los prometedores ingresos de estos megaproyectos, y, por otra, para defender a la población local de los atropellos cometidos contra ella.

La guerrilla centró su estrategia militar en los atentados contra la infraestructura eléctrica y continuó haciendo tomas de pueblos, como ocurrió en San Vicente, San Rafael, Argelia, Granada, Nariño y La Unión. También hizo bloqueos en la autopista Medellín-Bogotá y aumentó los secuestros de alcaldes y propietarios de fincas.

La población denunció abusos por parte de las FARC, entre ellos el uso de sitios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como las escuelas.

En 2000, la actividad de la guerrilla registró su punto más elevado, en buena medida por el protagonismo armado del ELN, que enfatizó sus ataques a la infraestructura eléctrica en las zonas de Bosques y Embalses, en particular en los municipios de San Luis, Cocorná, Guatapé, Granada y San Carlos. El 3 de noviembre de ese año, las AUC cometieron una masacre en Granada en la que mataron a 17 campesinos. Luego, el 6 de diciembre del mismo año, las FARC se tomaron el pueblo durante 18 horas. Entraron los frentes 9, 34 y 47 y con un carrobomba de 400 kilos de dinamita destruyeron gran parte del pueblo. Por este motivo, en 2001 más de la mitad de la población se desplazó y Granada pasó de tener 18.500 habitantes a tener solamente 8.824, según el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño.

Ese mismo año, las FARC amenazaron a todos los alcaldes del Oriente, lo que generó una fuerte reacción de la ciudadanía en contra del grupo armado y en defensa de sus mandatarios

locales. Como consecuencia de ello, los alcaldes se vieron forzados a despachar desde Medellín, lo que debilitó las posibilidades de las instituciones de responder a las graves situaciones que se presentaban en sus municipios.

En 2001, año en el que la actividad de la subversión comenzó a declinar por la presión de los grupos paramilitares, los municipios que concentraban la mayor actividad armada eran Cocorná y San Luis. En esa época se presentaron también en la región grupos de limpieza social que atacan a jóvenes, drogadictos, prostitutas y delincuentes, en especial en Rionegro, Guarne, La Unión y Marinilla.

En ese momento, como ahora, las guerrillas del ELN y las FARC se vieron disminuidas por la presión de los paramilitares y del Ejército, que las llevó a replegarse en sus corredores estratégicos de movilización, que comprenden la subregión de Bosques y otros municipios: San Francisco, San Carlos, Sonsón, Cocorná, San Luis, Argelia y Nariño. Para proteger sus territorios tradicionales, la guerrilla incrementó la utilización de minas antipersonal como una forma de contener las avanzadas del Ejército.

Mientras las FARC entraron en el negocio del narcotráfico, el ELN ha tenido una postura política de no involucramiento en dicho negocio, lo que ha sido evidente en el Oriente de Antioquia.

En respuesta a la acción de la guerrilla, la fuerza pública realizó operativos militares como la operación Mariscal, que buscaba garantizar el tránsito en la autopista Medellín-Bogotá durante las 24 horas del día. A partir de 2003, el Ejército inició el Plan Marcial, que después se reeditaría como el Plan Espartaco, y luego desarrolló el Plan Falange.

Muchos pobladores y organizaciones denunciaron, y hoy lo siguen haciendo, el bloqueo al que la fuerza pública los somete bajo el argumento de evitar el abastecimiento de la guerrilla, que en ocasiones presiona a los campesinos para que les suministren algunos bienes del mercado.

Las operaciones de la fuerza pública y las acciones de los paramilitares cuando empezaron a aparecer en el Oriente hicieron perder territorio a la guerrilla.

La llegada de los grupos paramilitares

En Antioquia, en 1994, se crearon las Convivir, grupos de autodefensa legalizados que se instalaron abiertamente en los municipios y, exhibiendo sus armas, dominaron a la población.

En esa época, la Gobernación de Antioquia impulsó las Convivir, tanto que de las 600 que había en el país en 1997, 64 estaban en Antioquia, según el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. En el Oriente se instalaron principalmente en Sonsón



y el Oriente cercano, encabezadas por militares retirados “que se desempeñaban en tareas de protección a comerciantes y ganaderos”¹⁴.

Esos esquemas de seguridad fueron luego la inspiración y la base para la creación de los grupos paramilitares.

En 1996, la dinámica de los grupos paramilitares tomó mayor fuerza en la región. Hicieron presencia inicialmente las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, con el bloque José Luis Zuluaga y el bloque Metro. Más tarde apareció el bloque Cacique Nutibara, que combatió al bloque Metro hasta eliminarlo y ocupar su territorio.

El Oriente sufrió la presencia paramilitar a partir de masacres en San Rafael, San Luis, San Carlos y en vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral, seguidas de asesinatos selectivos y más masacres. Su incursión y expansión se tradujo en graves violaciones de los derechos humanos. Solo en 2004, se presentaron cinco masacres en la región, en los municipios de Argelia, Cocorná, San Luis, Granada y San Carlos, y las organizaciones de víctimas estiman en 413 las víctimas directas de desaparición forzada.

Estos grupos mantuvieron presencia en la zona urbana de los 23 municipios del Oriente antioqueño. Según testimonios de personas de la región, en los municipios pequeños estos grupos mantenían el control en el área urbana, aun en aquellos en los que contaban con cuerpo de Policía. “Solo en los municipios del Altiplano actuaban clandestinamente”, afirman.

En la zona rural se ubicaron estratégicamente en el corregimiento San José, del municipio de La Ceja; en los corregimientos La Danta y San Miguel, en Sonsón; en el corregimiento El Jordán, en San Carlos, y en el corregimiento El Prodigio, en San Luis.

La incursión paramilitar en Antioquia tuvo tres estrategias¹⁵: primera, la militar, que consistía en abrirse el paso creando terror y ejecutando acciones criminales. La segunda, territorial, mediante el arrebato de territorios al enemigo, que eran las FARC, el ELN y todo aquel que los controvirtiera, aun si se trataba de antiguos amigos. La tercera, la política, que consistía en asegurar que partidos y personajes políticos afines a la causa consolidaran poder público y electoral que facilitara la consecución de sus intereses y protegiera lo que se iba logrando.

Desde el ingreso de los paramilitares al territorio, y de manera especial a partir de 1996 cuando su acción tomó mayor fuerza en la región, la estrategia definida por estos grupos para disputar los territorios de dominio de la guerrilla, más que el combate, fue la guerra sucia, en lo que ellos denominaron “quitarle el agua al pez”. Así, la población que militaba en la izquierda y los líderes populares, que reivindicaban –como lo siguen haciendo hoy– los derechos de la población más pobre y que, en esa medida, incomodaban los intereses del establecimiento, fueron considerados por los paramilitares como la base social de la

14 Estudio de diagnóstico y contextualización de los 23 municipios del Oriente antioqueño. Unidad de Análisis, Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. Enero de 2007.

15 López, Claudia (2007). La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia. En Corporación Nuevo Arco Iris. Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Intermedio Editores.

insurgencia. Contra ellos llevaron a cabo una campaña de exterminio materializada en masacres, homicidios, amenazas, torturas y desplazamientos forzados, entre otros.

Para financiarse, los paramilitares cobraban vacuna a los comerciantes, tuvieron vínculos con el tráfico de gasolina y establecieron

“una estrecha relación con el sector ganadero y el narcotráfico, vigilando los sembrados y participando en el proceso de producción y comercialización de droga, además de aprovechar el proceso de relativización para sembrar más cultivos ilícitos”¹⁶.

Otros grupos se ubicaron en la zona de las hidroeléctricas. En su momento, las organizaciones sociales denunciaron las labores de protección que estos grupos ilegales ejercían frente a los megaproyectos hidroeléctricos en los años 90. Mientras tanto, en el Oriente lejano, los paramilitares de Ramón Isaza y el bloque Metro obligaron a los campesinos a abandonar la zona acusándolos de colaborar con la guerrilla.

En respuesta a las incursiones de la guerrilla en la autopista Medellín-Bogotá, los paramilitares efectuaron durante los años 90 una labor de exterminio de habitantes de las veredas localizadas cerca de Cocorná, lo que dejó numerosos muertos y desaparecidos, así como decenas de familias que fueron obligadas a desplazarse.

Finalmente, el bloque Cacique Nutibara se desmovilizó a finales de 2003, con 868 ex combatientes y 467 armas entregadas. Este bloque, que era el primer grupo paramilitar que se desmovilizaba en Colombia, se ubicó en el municipio de La Ceja, su zona de concentración. Por su parte, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se desmovilizaron en febrero de 2006.

Durante el tiempo de operación de estas autodefensas organizadas, el Ejército registró acciones contra ellos, aunque de manera frecuente las organizaciones sociales denunciaron omisión frente a sus acciones. Antes de la desmovilización de estos grupos, por ejemplo, el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño señaló en 2007 que “la estrategia contra la guerrilla se consolidó mediante el copamiento paramilitar de los espacios que va liberando el Ejército, una estrategia militar que en algunas zonas combina Ejército y paramilitares”¹⁷.

La trayectoria armada y la transformación política afectaron seriamente la situación socioeconómica del departamento. El Oriente antioqueño, que en los años 80 era reconocido por el desarrollo industrial y floricultor, pasó a ser la región más violenta de Antioquia, incluso por encima del Valle de Aburrá.



16 Estudio de diagnóstico y contextualización de los 23 municipios del Oriente antioqueño. Unidad de Análisis, Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño. Enero de 2007.

17 *Ibidem*.

La incidencia del narcotráfico

La economía del narcotráfico también ha tenido impacto en el Oriente antioqueño.

Antioquia es el cuarto departamento del país con mayor número de cultivos ilícitos (6.096 hectáreas sembradas en 2008)¹⁸, aunque el Oriente es una de las zonas menos afectadas del departamento.

Se han registrado cultivos ilícitos en el Oriente lejano y la subregión de Bosques, que han afectado la dinámica social de la población. La siembra de coca ha llevado a numerosos campesinos a vivir en la ilegalidad, lo que ha roto procesos de cohesión social y de gobernabilidad.

En los últimos años se han encontrado algunos laboratorios de procesamiento de coca en municipios del Oriente Antioqueño, y se han identificado rutas para sacar la llamada “pasta de coca” hacia Medellín y el Magdalena Medio. En la región se asegura que estas rutas son manejadas por bandas criminales como Los Rastrojos y Los Paisas.

A su vez, con los cultivos han llegado grupos armados que han impuesto sus normas y su voluntad por medio de la fuerza, sometiendo a los campesinos a un rol de completa subordinación. También se han presentado presiones a los minifundistas para cambiar sus cultivos de pancoger por cultivos ilícitos, lo que ha dejado a estos campesinos sin salida.

Pero, por otra parte, ante la situación de pobreza de los pobladores, los cultivos ilícitos han significado una salida económica para buena parte de los campesinos y jornaleros desplazados por la violencia o la falta de oportunidades.

Así ha sucedido en municipios muy afectados por la pobreza como Argelia y San Francisco, donde históricamente los medios de producción han sido escasos y no cuentan con la infraestructura apropiada para comercializar y distribuir sus productos agrícolas.

La economía del narcotráfico produjo también una capa de compradores de tierra – nuevos latifundistas –, lo que elevó el valor de la tierra y del crédito, que fortalecieron las dinámicas de especulación. De esta manera, el negocio ilícito ha traído un proceso de “relativización” en varios municipios del Oriente lejano, que han conducido a la acumulación de la tierra con fines especulativos y no productivos.

Este fenómeno de concentración se ha efectuado con la ayuda de los grupos paramilitares y sus estrategias de terror.

“La expansión de los grupos paramilitares y del conflicto armado ha propiciado desplazamientos de población y apoyado procesos de concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de narcotraficantes, ganaderos, especuladores, y de los mismos dirigentes del paramilitarismo”¹⁹.

¹⁸ Informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, presentado en junio de 2009.

¹⁹ Mondragón, Héctor (2002). *La economía rural y la guerra. Ponencia presentada el 5 de abril para Mesas ciudadanas para una agenda de paz. Taller agrario y cultivos ilícitos. Citado en Estudio de diagnóstico y contextualización de los 23 municipios del Oriente antioqueño. Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente Antioqueño.*

3. Actores locales de paz y sus capacidades de construcción de paz

La cultura ciudadana en esta región sobresale en el ámbito nacional. Y aunque sus importantes procesos organizativos se vieron afectados por la situación aguda del conflicto que se vivió entre 1993 y 2003, orientado a debilitar las organizaciones y los liderazgos comunitarios, entre otros fines, la reacción de la ciudadanía y su capacidad organizativa han hecho que el Oriente antioqueño se destaque por la manera de reaccionar al conflicto y de organizarse para superar sus efectos.

Las organizaciones sociales y la participación activa en los asuntos públicos tienen gran tradición en el Oriente de Antioquia. Esta vocación y esta filosofía se mantienen favorecidas por una gran identidad de región. En el proceso de investigación del Proyecto ART - REDES DEL PNUD y la Corporación Justicia y Paz sobre capacidades locales de paz en Oriente Antioqueño se identificaron 1.576 organizaciones sociales e institucionales de la región que le están apostando a la paz.

A su vez, se ha presentado la confluencia de esfuerzos de las instituciones del Estado, de organizaciones regionales y nacionales de la sociedad civil y de la cooperación internacional, que han hecho un significativo aporte en esta región. “Esto ofrece unas condiciones particulares para cerrar la brecha social de la inequidad, con una apuesta regional de carácter político, social y económico”, dice Benjamín Cardona Arango, uno de los presidentes de la Asamblea Provincial Constituyente.

Estos esfuerzos confluyeron en la creación del segundo Programa de Desarrollo y Paz (PDP) del país, coordinado por la Corporación Programa Desarrollo para la Paz, Prodepaz, con campo de acción en el Oriente de Antioquia y en algunos municipios del Magdalena medio y nordeste de ese departamento.

Prodepaz trabaja con las organizaciones y los proyectos que tienen presencia en los 23 municipios del Oriente antioqueño y cuatro localidades que integran la subregión Porce Nus y una del Magdalena Medio, con miras a la integración y el desarrollo territorial.

De la mano de las organizaciones locales y fortaleciendo sus redes, Prodepaz ha buscado construir condiciones de convivencia pacífica y vida digna mediante la articulación de esfuerzos institucionales, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el empoderamiento comunitario.

Durante varios años, desarrolló tres programas implementados en la región en torno a la paz y el desarrollo: el Programa de Desarrollo y Paz (PDP); el Segundo Laboratorio de Paz –que concluyó a finales de 2009– y el Programa Paz y Desarrollo, de la Agencia Presidencial para la Acción Social.

Como impulsor de procesos sociales regionales, Prodepaz generó articulaciones como la Red de Infancia y Adolescencia y la Mesa de Derechos Humanos, entre otras.



Otras organizaciones de carácter regional han desempeñado un papel definitivo en la región, como la Corporación Conciudadanía, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y el Programa por la Paz, las tres con énfasis en la formación de ciudadanía, el empoderamiento de las víctimas y la defensa de los derechos humanos.

Además de estas organizaciones, hay un gran movimiento de iniciativas locales de paz, que le han apostado principalmente a cinco búsquedas: una cultura de paz y negociación del conflicto; un territorio administrado con los principios de la gobernabilidad; el impulso al desarrollo económico; la protección de los derechos humanos y de las víctimas y la defensa del ambiente.

Actores por una cultura de paz y negociación del conflicto

Una de las manifestaciones más importantes de la gente del Oriente fue su reacción ante la transformación inconsulta de su medio de vida. Por eso, en las últimas décadas conformaron organizaciones que los representaron y asistieron a negociar con las autoridades y las empresas constructoras de grandes proyectos de infraestructura unas mínimas condiciones para su reubicación.

A partir de esta experiencia –que predominó en los años 70– comenzó una gran corriente ciudadana, que después de defender sus derechos frente a la construcción de los embalses, se vio en la necesidad de reaccionar ante la crisis humanitaria que dejaba el conflicto armado, en especial por las acciones de las FARC.

Así, como se mencionó anteriormente, dicha corriente creó asambleas comunitarias y comités locales de reconciliación que empezaron a buscar salidas para terminar con los atropellos a la población y dar solución al conflicto armado en la región. Trabajaron intensamente en busca de la negociación del conflicto, principalmente desde los municipios de Cocorná, San Luis y San Francisco.

En 2000, bajo la influencia del movimiento constituyente nacional, tomaron la decisión de convertir las asambleas comunitarias en constituyentes, al amparo del artículo 3 de la Constitución Nacional: la soberanía reside en el pueblo.

Tras el Mandato por la Paz de 1997 y los intentos de diálogo con las FARC en el Caguán, había en el país un fuerte sentimiento para negociar la paz. Es así como en varias regiones la ciudadanía reclamaba la posibilidad de realizar diálogos regionales con los actores armados. La Iglesia, por su parte, hacía acercamientos para lograr diálogos pastorales. La sociedad civil estaba resuelta a parar el conflicto.

Las amenazas de las FARC a los alcaldes municipales de la región en el año 2000 fueron el detonante que provocó el rechazo masivo de la población y la proclamación de la Asamblea

Provincial del Oriente Antioqueño, como muestra de soberanía popular y de reclamo del legítimo derecho a elegir a sus gobernantes.

Como consecuencia de ello, en 2001, los 23 alcaldes del Oriente conformaron el Consejo Subregional de Alcaldes y, acompañados por la Gobernación de Antioquia, lideraron un movimiento encaminado a pedir a los actores armados ilegales que cesaran sus ataques a la población.

Este Consejo logró hacer acuerdos con el ELN, que disminuyeron las hostilidades. Sin embargo, los diálogos regionales eran rechazados por el Gobierno nacional. Los alcaldes fueron investigados y luego absueltos por la justicia.

Varias organizaciones locales participaron activamente para hacer posible estos procesos, entre ellas la Corporación Vida, Justicia y Paz, que promovió la movilización social frente a los hostigamientos de los actores armados, en 2001, cuando se logró el rescate de un personero y de los alcaldes de San Francisco y Sonsón, capturados por la guerrilla. Mediante la labor de estas organizaciones, también se consiguió el canje de militares en poder de la insurgencia. Estas fueron acciones posibles gracias a sus iniciativas de diálogo con el Gobierno y los actores armados.

Después de la creación de la Asamblea Provincial en 2002, fue conformada la Asamblea Constituyente de Antioquia, un escenario departamental de representación y participación ciudadana en el marco de la cual se construyó un pacto social denominado la Agenda Pública de Paz y Desarrollo para el departamento, que impulsó la definición de metas de paz y la cohesión social en torno de ellas.

En el proceso para impulsar una cultura de paz e incidir en la opinión pública, en el Oriente se ha trabajado en valores, costumbres, actitudes, referentes sociales, acciones simbólicas, conductas humanas y procesos de formación. Esto ha sido una vía para la transformación creativa de situaciones conflictivas.

Así, se han promovido y visibilizado acciones colectivas para transformar conceptos y prácticas, para recuperar la memoria y generar procesos de educación para la paz y la recuperación psicosocial de los niños víctimas de la violencia. Los actos simbólicos, las jornadas, las marchas, los foros y los talleres han sido instrumentos para lograr este fin.

Hay varios casos que evidencian este trabajo en cultura de paz, entre ellos el Movimiento Sembradores de Paz (de carácter regional) y Jóvenes por la Paz, en municipio de Nariño. Las dos iniciativas surgieron para promover la formación en cultura de paz ante la necesidad de intervenir sobre la situación de conflicto y los efectos de éste sobre niños, niñas y jóvenes, especialmente. El objetivo que comparten es generar entre los jóvenes y niños nuevos valores para contrarrestar y transformar las situaciones violentas entendiendo que la violencia es susceptible de transformar.

En el mismo sentido, partiendo de la base de que la construcción de desarrollo y paz pasa por ampliar el concepto de la comunicación más allá de la producida por los medios de



comunicación, el Oriente ha trabajado para comprender la comunicación desde la perspectiva de los “hacedores” de información y como herramienta para profundizar la democracia.

Esto la ha llevado a crear una importante red de comunicadores populares que trabajan alrededor de identificar, convocar, fortalecer y acompañar a comunicadores y colectivos de comunicaciones como sujetos activos capaces de transformar su entorno social gracias al ejercicio consciente de la comunicación.

Lo primero que hicieron fue construir y aplicar una metodología participativa y por consenso para caracterizar a medios locales e impulsar la articulación de las iniciativas en una Mesa regional de medios de Oriente Antioqueño, que está en proceso de consolidarse y ya ha tenido resultados para destacar como el premio regional de periodismo “Orlando López” y el impulso a la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia (Asenred), dinámica regional importante que el proyecto ART - REDES DEL PNUD ha fortalecido por medio de Prodepaz.

Con estas y otras actuaciones en cultura de paz el Oriente ha encontrado oportunidades para crear sus propios espacios, nuevas opciones e identidad colectiva.

Actores del desarrollo económico sostenible y la defensa del ambiente

Ante el cambio de lugar de asentamiento, de la vocación productiva y el impacto ambiental ocasionado principalmente por la construcción de las hidroeléctricas, en el Oriente se han conformado juntas de vivienda, juntas de acueducto y numerosas organizaciones de base socioeconómica como la asociación de pesqueros, las paneleras, las ambientalistas y las cooperativas.

También se han integrado organizaciones gremiales, como las de comerciantes y asociaciones campesinas, que buscan mejorar las condiciones de vida de cada sector.

Entre las organizaciones locales se destaca la Agencia para el Desarrollo Económico de la Provincia del Oriente Antioqueño (Adeproa), una institución que propende por el desarrollo integral del Oriente antioqueño, con gran capacidad de articular los sectores públicos, privados y comunitarios. Su apuesta es contribuir a la superación de la pobreza.

Actores de la defensa de los derechos humanos y de las víctimas

En el 2008, el Observatorio de Paz y Reconciliación identificó alrededor de 70 organizaciones sociales con carácter de movilización y manifestación colectiva, que trabajan por la reconstrucción del tejido social y humano, la reducción de riesgos, la mitigación

de los efectos del conflicto en población vulnerable y vulnerada y que le apuestan a la reconciliación.

Entre estas experiencias se destacan las organizaciones de mujeres, que han surgido en los 23 municipios de la región, y que han cumplido un papel fundamental en la recuperación emocional de las víctimas y en la gestión para la satisfacción de sus derechos.

Entre las organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de las víctimas se destacan:

- ▶ AMOR (Asociación de Mujeres del Oriente de Antioquia). Es una organización conformada alrededor de las dinámicas locales de mujeres. Desde sus inicios, ha enfocado sus esfuerzos en buscar la paz, el respeto de los grupos armados por la población civil y el protagonismo femenino en los procesos de paz. Desarrollan propuestas para empoderar a las mujeres, promover su formación, su incidencia política y la reconciliación.
- ▶ Aproviaci (Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanas). Las víctimas han conformado esta asociación que reúne a las organizaciones municipales de víctimas para impulsar jornadas de formación, la reconstrucción de la memoria, el fortalecimiento de la organización y la movilización por el respeto y la garantía de sus derechos. Varias de las mujeres que pertenecen a la organización se han graduado como promotoras de vida y salud mental y ofrecen terapias comunitarias que ayudan a las víctimas mediante palabras y abrazos.
- ▶ Asovida – organización que apoya a las víctimas. Ha centrado su trabajo en la reconstrucción de la memoria. Su principal obra ha sido el salón del Nunca Más en el municipio de Granada.
- ▶ Asomma (Asociación de Mujeres del Municipio de Marinilla). Esta organización municipal se conformó hace 15 años y desde entonces impulsa la formación en derechos humanos, procesos para empoderar a las mujeres e incidir en la política pública.
- ▶ La Asociación de Comunicadores del Oriente Antioqueño, Asenred, ha creado una importante dinámica en su labor comunicativa para transformar la opinión pública hacia la creación de una cultura de paz.
- ▶ * El Observatorio de Paz y Reconciliación y la Unidad Móvil de Derechos Humanos. Se crearon para hacer un seguimiento a la situación de derechos humanos de la región, a través de investigaciones e informes periódicos sobre el tema. Estas iniciativas estuvieron activas mientras se desarrolló el II Laboratorio de Paz, que concluyó en 2008. La Gobernación de Antioquia continuó el trabajo de las unidades móviles de derechos humanos al crear ocho de éstas para atender todas las regiones del Departamento. Se trata de equipos interdisciplinarios que trabajan por la vigencia plena de los derechos humanos y por la prevención de la violencia intrafamiliar.



- ▶ Las unidades móviles de atención a víctimas fueron creadas siguiendo el esquema. Con una metodología interdisciplinaria e interinstitucional han sido atendidas más de 2.500 víctimas en veredas y corregimientos.
- ▶ El Programa de Búsqueda Social de Personas Desaparecidas busca identificar los cuerpos que han sido enterrados como NN en los cementerios, particularmente en el del municipio de Rionegro. De este programa hacen parte varias organizaciones y cuenta con una activa responsabilidad y presencia del grupo de búsqueda de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación.

Actores de la gobernabilidad

El interés de romper con la hegemonía y la exclusión política llevó a los ciudadanos a organizarse, formarse, gestionar y sacar adelante movimientos cívicos que lograron algunas transformaciones en la región.

Tal vez el principal logro de actores como el Movimiento Cívico del Oriente y el Movimiento de Acción Peñolita, entre otros, fue el despertar de la ciudadanía para ejercer su papel como sujetos políticos y apropiarse del escenario público, como frentes en los cuales tiene responsabilidad.

Esto condujo a un significativo avance en el desarrollo de mecanismos de democracia participativa en el gobierno local.

Además, las asambleas constituyentes, que como se mencionó tuvieron un papel en los esfuerzos de diálogo y negociación, crearon condiciones favorables para la acción participativa, abrieron espacios para el ejercicio de los derechos ciudadanos y visibilizaron claramente el rol de la comunidad.

No obstante, el proceso de descentralización no ha conducido en todas las localidades a establecer una estrecha relación entre descentralización y participación, como lo han demostrado las jornadas electorales de los años recientes. Si bien se observa el crecimiento de los movimientos cívicos y la manera como se han sostenido en el tiempo, analistas de la región consideran que no es significativa la renovación traída por los movimientos cívicos, influenciados por los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, que representan la hegemonía contra la cual ellos manifiestan luchar.

Una de las experiencias a resaltar en este sentido fue el proceso de desarrollo humano para la paz y la reconciliación en el municipio de San Francisco, que buscó fortalecer la ciudadanía y avanzar en el desarrollo local. En el marco de este proceso, en el que participan organizaciones locales, la administración municipal y entes regionales, fue construido el plan de desarrollo 2008-2011 con perspectiva de los derechos humanos. Su meta hoy es hacerlos realidad.

También fue relevante en la región el papel de la Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño (Aspoa), que por medio de procesos formativos ha contribuido a que la comunidad se apropie de la defensa y garantía de sus derechos. Aspoa también ha integrado la función de los personeros a la de otras instituciones del Estado y organizaciones comunitarias, logrando impactar en la movilización ciudadana hacia la reivindicación de sus derechos.

Al igual que los personeros, los alcaldes se organizaron en el Consejo Subregional de Mandatarios que, en la época de agudización de la violencia, buscaron acuerdos humanitarios. A raíz de esto fueron investigados por los organismos de control y eximidos de toda responsabilidad. Ahora mantienen esfuerzos subregionales y trabajan por aumentar los niveles de desarrollo de las localidades.

4. Situación actual y dinámicas

Estancamiento en el desarrollo humano

El Oriente antioqueño ha sido tradicionalmente más pobre que su capital, Medellín, y que el promedio del país, pero menos que las demás subregiones del departamento. Para 2002, el 57% de la población pertenecía a los niveles 1 y 2 del Sisben. Actualmente, el 49% de la población del Oriente se encuentra en condiciones de pobreza, particularmente la que habita los municipios del Oriente lejano²⁰.

Por otra parte, la desigualdad entre los diferentes municipios ha sido alta y se ha agravado con la violencia. Mientras los municipios de Argelia, San Francisco, Cocorná y Nariño tenían en 2002 el 90% de su población en los niveles 1 y 2 del Sisben, el 80% de la población de San Carlos, Abejorral, San Rafael, San Luis, Alejandría, San Vicente, Granada y Sonsón correspondía a los mismos niveles²¹.

En los años recientes, la población antioqueña se ha visto afectada por la pobreza. Esto es resultado de varias situaciones: por una parte, de los desequilibrios macroeconómicos nacionales y del bajo nivel educativo de la fuerza laboral local. Y, por otra, más aguda y más presente en el Oriente antioqueño, por el desplazamiento forzado y masivo, que más que el empobrecimiento condujo a la pauperización de la población.



²⁰ López Castaño, Hugo (2005). *El mercado laboral en el Oriente antioqueño*. En Cuadernos PNUD. Estudios Regionales.

²¹ *Ibídem*.

“En Antioquia la población en condiciones de pobreza y miseria representa más de la mitad del total (53,9%) convirtiéndose en un problema social incuestionable que refleja los altos niveles de inequidad”²².

El Oriente antioqueño presenta tasas altas de cobertura en la primaria y tasas bajas y decrecientes en los niveles subsiguientes. Los mayores déficits se registran en el preescolar, la secundaria media y la superior²³.

La deficiente cualificación de la mano de obra es uno de los principales cuellos de botella del mercado laboral regional. Ello ha obligado a muchas empresas allí localizadas a buscar y trasladar trabajadores y empleados desde el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Con la crisis económica que afectó al país en los años 90, la tasa de desempleo del Oriente subió del 6,6% en 1998 al 11,5% en 1999²⁴. La tasa urbana pasó del 10,1% al 14,4% y la rural del 3,7 al 8,7%.

La recuperación económica regional del año 2000, inducida por el auge de las exportaciones industriales que respondieron a la devaluación de 1999, hizo caer momentáneamente ese indicador al 9,8%²⁵. No obstante, volvió a incrementarse en 2001, alcanzando el nivel crítico del 14,8% (22,4% en las cabeceras)²⁶. Desde entonces, la relativa pacificación y la recuperación económica de la región han permitido bajar esa tasa otra vez al 12,3% (2003).

De acuerdo con la Cámara de Comercio del Oriente, en 2004 las sociedades registradas generaban unas 11.300 plazas. De estas, el empleo formal representa apenas el 4,5% de la ocupación de la región. Entre esas 11.300 plazas, unas 6.640 (el 59%) eran empleos industriales; 4.057 (el 36%) agropecuarios (casi todos en flores de exportación) y el resto de otros sectores.

El Oriente antioqueño, que en los años 80 era reconocido por el desarrollo industrial y floricultor, pasó a ser la región más violenta de Antioquia.

El Estado y las empresas privadas le han dado un impulso al desarrollo del Oriente cercano con la proyección de grandes obras de infraestructura, vías de comunicación, como el túnel de Oriente, la instalación de industrias, la definición y cumplimiento de planes de desarrollo y la creación de instituciones descentralizadas como la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y la Asociación de Municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. Sin embargo, en muchas ocasiones, como se ha mencionado, estas grandes obras han tenido un impacto negativo en la población en mayor estado de vulnerabilidad.

22 López, Claudia (2007). *La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia*. En Corporación Nuevo Arco Iris. *Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*. Bogotá: Intermedio Editores.

23 López Castaño, Hugo. *Op. cit.*

24 *Ibidem.*

25 *Ibidem.*

26 *Ibidem.*

La recuperación social del territorio

La recuperación social del territorio es una estrategia del Gobierno nacional orientada a consolidar el Estado social de Derecho en territorios en los que las Fuerzas Armadas y de Policía han alcanzado el control militar. Esta estrategia refuerza las acciones militares con intervenciones de tipo económico y social y las primeras acciones cívico-militares, en lo que el Gobierno ha denominado la política de consolidación de la seguridad democrática.

Hasta el momento, en la recuperación social del territorio se ha observado una presencia militar muy fuerte, a través de acciones orientadas principalmente al combate de la guerrilla, la erradicación manual de cultivos ilícitos y el desminado humanitario en San Francisco y San Carlos.

Otro esfuerzo importante en esta estrategia ha sido el impulso al retorno de la población desplazada, en la mayoría de los casos acompañados con acciones cívico-militares, como el retorno que se realizó en octubre de 2009, cuando el ministro de Defensa acompañó a más de 500 habitantes a que regresaran a Santa Ana después de varios años de estar por fuera de sus tierras.

Para el Gobierno, el Oriente antioqueño es un ejemplo emblemático del retorno²⁷, ya que 11.480 personas han regresado, especialmente a los municipios de Granada, San Francisco, San Carlos, San Rafael, Cocorná y San Luis, según Acción Social. Paralelo a los retornos, el Gobierno está convocando a otras poblaciones al repoblamiento de las zonas recuperadas para dar sostenibilidad al proceso.

Asimismo, se adelanta un proceso de diálogo regional en torno a los retornos de la población desplazada. A través del seguimiento a casos específicos se constata si los retornos cumplen con las garantías de seguridad, dignidad y voluntariedad establecidas en la normatividad internacional, y con las sentencias y autos de la Corte Constitucional de Colombia.

En este marco, se ha generado el debate acerca de la pertinencia o no de los retornos subsidiados, y de sus efectos en los procesos de desarrollo local.

Algunos alcaldes han manifestado preocupación porque a partir de la estrategia de recuperación social del territorio –apoyada de manera especial por la Gobernación de Antioquia– la mayoría de decisiones se están tomando desde Bogotá sin que se tengan en cuenta la planeación y la autoridad local. Lo mismo ocurre en el manejo de la seguridad, según las autoridades locales, quienes consideran que la Policía y el Ejército están respondiendo a las medidas adoptadas en la capital y no a lo que determinan en Antioquia.

Las organizaciones sociales también han expresado preocupación por el riesgo en que se pone a la población con las acciones cívico-militares, por el involucramiento de los militares



27 Molano Aponte, Diego (director de Acción Social) (2010). Retornar es vivir. En revista Hechos del Callejón, (54), junio.

en actos que competen a las autoridades locales –como la construcción de carreteras– y, además, porque la mayoría de los proyectos para el desarrollo se están vinculando a la estrategia de recuperación social del territorio y no encuentran posibilidades de gestionar proyectos al margen de dicha estrategia.

La presencia de actores armados en la región

Organizaciones sociales, centros de investigación nacionales y las propias autoridades alertaron en 2007 sobre la presencia más o menos visible de la guerrilla en algunas regiones que hacían parte de las zonas de influencia de las desmovilizadas autodefensas.

Así también lo señaló la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) en Colombia de la OEA en su X Informe²⁸.

En estas zonas, según el organismo internacional, la incursión de la guerrilla se está dando de manera paulatina, anteponiendo el trabajo de inteligencia y construcción de redes a una ofensiva militar directa. En el Oriente antioqueño esto se observa en los municipios de San Carlos, San Luis, San Francisco, San Rafael, Cocorná, Granada, Sonsón, Argelia y Nariño. Testimonios de la comunidad confirman las denuncias de la misión internacional.

Uno de los fenómenos que más preocupaba a la población frente a la permanencia de la guerrilla en la zona era el reclutamiento de jóvenes. Miembros de la comunidad dieron testimonio de que “la situación económica familiar es tan precaria que aunque los jóvenes no quieran, no tienen otra opción sino la de irse con algún grupo armado”²⁹.

En el Oriente antioqueño se ha identificado el reclutamiento de niños y jóvenes, tanto para ir a las filas como para servir de informantes de los diferentes actores armados. Esta situación ha cambiado recientemente a partir de los resultados del Ejército sobre las FARC, que han disminuido al máximo las hostilidades provenientes de este grupo armado ilegal.

Desmovilizados y estructuras emergentes

Antioquia es uno de los departamentos que alberga el mayor número de desmovilizados de grupos paramilitares. Según el Gobierno, hay actualmente 10.157 ex combatientes, que representan el 30% del total del país. El programa presidencial para atender a esta población se ha desarrollado con mayor énfasis en Medellín.

La desmovilización paramilitar contribuyó enormemente al descenso en el número de homicidios, especialmente en Medellín, donde la tasa bajó de 98,2 homicidios por cada

28 MAPP-OEA. *Décimo Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la misión MAPP-OEA*. Octubre de 2007.

29 *Revista La Posada*. Segundo Laboratorio de Paz, Oriente antioqueño.

100.000 habitantes en 2004 a 29,6 en 2006, según el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, en los tres últimos años estos han aumentado en forma dramática.

Según miembros de la comunidad, después de la desmovilización de los grupos paramilitares bajaron los niveles de violencia, pero estos aún mantienen el control. La MAPP-OEA ha alertado en sus informes trimestrales sobre la permanencia de estructuras criminales, en las que participan desmovilizados y no desmovilizados de los grupos paramilitares y quienes controlan economías ilícitas, especialmente las relacionadas con el narcotráfico.

La estructura emergente denominada Águilas Negras se ha asentado en la zona de Embalses, en la zona de Bosques –en municipios como San Francisco y San Luis–, donde realizan acciones extorsivas y donde se ha denunciado una fuerte presencia con perspectiva de dominio territorial en las veredas cercanas a la autopista Medellín-Bogotá, en la zona de Páramo, como en Sonsón.

En la zona de Bosques, en municipios como San Francisco, la personera denunció amenazas de paramilitares contra su vida y la de algunos concejales, en 2008. Ese mismo año, en la zona de Embalses, 32 familias de pescadores que desarrollan su oficio desde hace 15 años en el embalse de San Lorenzo, municipio de San Rafael, fueron forzadas a desplazarse.

Las actividades de las Águilas Negras están orientadas al cuidado del negocio del narcotráfico y a otras actividades ilícitas y actualmente causan gran zozobra a la población, según testimonios de la comunidad.

“Grupos paramilitares que han permanecido en la región a pesar de la desmovilización general de esta organización, otros que se han reestructurado y algunos más que nunca se desmovilizaron continúan amenazando a hombres y mujeres”, reporta la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño en su informe de 2008. Sobre estos hechos, la población ha presentado denuncias ante las personerías municipales.

Muchos de los desmovilizados que actuaron en la región y hoy están en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, como Ramón Isaza y Luis Eduardo Zuluaga alias Mac Giver, han negado su accionar violento en la región y han desconocido los derechos de las víctimas. Además, han presentado ante el tribunal obras construidas en la época aguda del conflicto –entre ellas, carreteras y centros de salud– como actos de reparación.

El narcotráfico y los cultivos ilícitos

A partir de 2002 se incrementó el número de hectáreas de coca cultivadas en Antioquia, pasando de 3.030 a 6.157 hectáreas en 2006. En 2007 los cultivos llegaron a abarcar 9.926 hectáreas, y bajaron a 6.096 hectáreas en 2008. En la actualidad, Antioquia es el cuarto



departamento con mayor número de hectáreas de coca cultivadas, que corresponden al 8% del país³⁰.

La disminución responde a los programas de aspersión aérea y erradicación manual de cultivos. En el Oriente antioqueño no hay grandes siembras de cultivos ilícitos, aunque los municipios con mayor cantidad de hectáreas sembradas son San Luis y San Francisco, donde los cultivos aumentaron entre 2007 y 2008. A su vez, en Cocorná se detectaron cultivos por primera vez en 2008 (cuadro 2)³¹.

Cuadro 2. Hectáreas de coca en municipios del Oriente antioqueño, 2008	
Argelia	1
San Francisco	235
San Luis	271
Cocorná	13
Sonsón	73
San Rafael	7
San Carlos	17
Nariño	17

Fuente: Simci, UNODC.

Sin embargo, los fenómenos asociados a los cultivos dejan una huella importante en el territorio. El décimo informe de la MAPP-OEA señaló que hay una clara relación entre zonas de cultivos ilícitos y zonas con presencia de estructuras rearmadas y reductos, y que facciones emergentes controlan sembradíos de uso ilícito.

Los recursos del narcotráfico, por su parte, son otro factor que acentúa la conflictividad, en la medida en que están presionando a los campesinos a que vendan sus tierras.

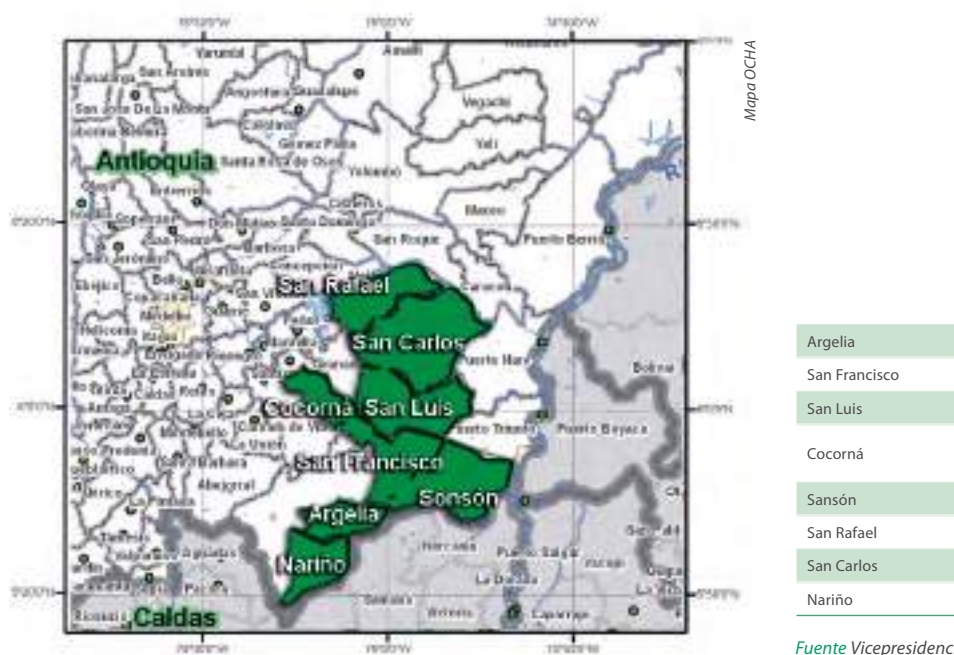
El interés de estos actores en la compra de tierras puede obedecer a varias razones: proporcionar una base terrestre a las rutas de abastecimiento de pasta de coca, la reinversión de sus ganancias y su posicionamiento por medio de la adquisición de tierras y la protección que ofrecen con un ejército de particulares. Cuando se acelera la concentración de la tierra y el desalojo campesino, los narcotraficantes terminan por convertirse en actores sociopolíticos y militares del territorio.

Otro fenómeno creciente en torno a estos cultivos y que genera gran preocupación es la vinculación de menores de edad, ya sea como informantes, “raspachines” –quienes cosechan

30 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Informe Simci para municipios, 2008.

31 *Ibidem*.

Municipios del Oriente Antioqueño con mayor cantidad de áreas de coca cultivada



la hoja de coca— o en el transporte de insumos o de pasta procesada³². Esta situación, que ha sido observada en San Francisco, San Carlos, Nariño y Argelia, no solo trae consecuencias nefastas para la formación de los menores al vincularlos a acciones ilegales sino que además los pone en alto riesgo.

Los actores armados en la política y la gobernabilidad local

Tanto la guerrilla como los grupos paramilitares han tenido incidencia en la política y en las administraciones municipales de esta región.

En años recientes, en el Oriente antioqueño se han presentado acciones que han coartado la libertad de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, como ocurrió durante las elecciones de 2002 y 2006 al Congreso y en las jornadas de elección de autoridades locales, en 2007.

Entre 2002 y 2008 proliferaron las amenazas que llevaron a la renuncia masiva de aspirantes a cargos de elección popular. Dos candidatos al Concejo de Cocorná fueron asesinados en 2006 y las FARC amenazaron a 11 candidatos más, que renunciaron a su aspiración en 2006. A su vez, jurados de votación de puestos rurales manifestaron temor ante los hostigamientos del frente Jacobo Arenas de las FARC, en el año 2006.



32 Sistema informativo Inforiente. En www.inforiente.info

El estudio *Las otras caras del poder* analiza los vínculos de los grupos ilegales con la política y la institucionalidad pública. Sobre el Oriente antioqueño, cuyo estudio de caso se realizó en San Carlos, señala:

“En los municipios donde las guerrillas han desarrollado alguna actividad destinada a influir en los procesos electorales se observan dos tipos básicos de intervención. Uno de ellos orientado a participar en el poder local a través de la elección de candidatos propios o de avalar políticos cercanos a sus intereses, de lo cual se encontró evidencia en San Carlos. Un segundo tipo de intervención busca sabotear y obstaculizar los procesos electorales... En San Carlos, tanto el ELN como las FARC intentaron acercarse al Movimiento Cívico Sancarlitano, el cual empezó a destacarse en el escenario local desde mediados de los años ochenta. En la medida en que dicho movimiento, que claramente se distancia de la lucha armada, desapareció por la acción violenta de grupos de derecha aliados con los poderes tradicionales locales, cambiaron las formas de incidencia electoral, encontrándose evidencias de acciones contradictorias destinadas, por un lado, a infiltrar la institucionalidad y, por otro, a sabotearla”³³.

Algo semejante ocurrió con el paramilitarismo. Una vez logró asentar su poder local tanto militar como político, la estrategia dominante desde fines de los años 90 fue su vínculo con políticos a través del apoyo, el aval o el patrocinio de candidatos a las alcaldías, los concejos y el Congreso de la República. En un segundo momento se realizaron alianzas y negociaciones y se brindó apoyo financiero a sus campañas, incluyendo servicios de seguridad, señala el mismo estudio.

En cuanto a los mecanismos de incidencia electoral utilizados contra la población civil, los paramilitares son acusados de cometer delitos electorales para beneficiar a sus aliados políticos: trashumancia electoral, compra de votos y constreñimiento al elector, entre los más visibles. Además, recurren a mecanismos como los asesinatos selectivos, las amenazas directas o las presiones sobre la decisión del voto, como ocurrió en San Carlos.

Las manifestaciones de la violencia

La violencia que sufrió la población del Oriente antioqueño entre 1993 y 2005 “no tiene nombre”, dicen algunos líderes. De sus 23 municipios, uno de los más atropellados fue Argelia. En esos doce años, su población pasó de 10.852 habitantes a 6.823 como consecuencia de los efectos del conflicto armado.

33 Velásquez, Fabio (coordinador). *Op. cit.*

En los últimos años, sin embargo, los principales indicadores del conflicto armado se han reducido por la política de seguridad democrática, según el Gobierno. Por ejemplo, mientras en el año 2000 ocurrieron en la región del Oriente 119 plagios³⁴, en 2004 estos se redujeron a 15. Los homicidios han disminuido año tras año. Mientras en 2003 se presentaron 512, en 2008 solo hubo 138³⁵.

Violaciones a los derechos humanos

La violación a los derechos humanos ha sido una constante en el Oriente antioqueño. Una de las manifestaciones que actualmente preocupa a la población es que continúan los señalamientos de la fuerza pública que vinculan a la población civil con acciones y grupos armados, poniendo en alto riesgo su vida al convertirlos en blanco de amenazas de otras fuerzas en armas³⁶. Esto se presenta de manera especial en las subregiones de Bosques y Embalses.

Como consecuencia de esta situación, se han visto afectadas la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño (Asoproa) y la Corporación Jurídica Libertad, uno de cuyos miembros, Gerardo Ciro, fue asesinado en 2008.

Muchas de las organizaciones de víctimas, en especial las de población desplazada como Asoder y varios de sus líderes han sido amenazados a través de panfletos que las bandas emergentes han circulado entre los años 2009 y 2010.

Entre 2001 y 2004, en el Oriente de Antioquia se registraron 3.067 casos de crímenes de lesa humanidad. La mayor parte de estos casos se concentró en la zona del Altiplano (1.039), seguida de la zona de Embalses (847), la zona de Bosques (791) y la zona de Páramo (336)³⁷.

Durante el periodo 2000-2004 se registraron 258 amenazas, según la misma fuente. Asimismo, en ese mismo lapso se cometieron 46 masacres en las que murieron 248 personas. Se registraron 56 desapariciones y 33 casos de torturas. La mayoría de las víctimas fueron de la población campesina: 651 fueron asesinados, 18 sufrieron ejecuciones extrajudiciales y 85 murieron en masacres, casi todos estos hechos realizados en zonas rurales de los municipios de la región³⁸.

Los educadores también pusieron una cuota alta de víctimas en ese periodo: 13 fueron asesinados y 6 padecieron desaparición forzada, según datos de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida). Los líderes comunitarios fueron de los más afectados por



34 Instituto Popular de Capacitación. *Que los árboles dejen ver el bosque. Derechos humanos en Antioquia, 2005. Compilación Equipo Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano.*

35 *Forensis, informe anual del Instituto de Medicina Legal.*

36 *Mesa de Derechos Humanos, Informe 2008.*

37 *Píldoras para la memoria, Informe del Instituto Popular de Capacitación - IPC, 2005.*

38 *Ibidem.*

las constantes amenazas y presiones. Durante estos cuatro años fueron asesinados en el Oriente antioqueño 20 miembros de juntas de acción comunal.

Las mujeres fueron víctimas de 146 crímenes de lesa humanidad, 100 de los cuales fueron asesinatos³⁹.

Los falsos positivos

Los falsos positivos es un término dado en el país a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la fuerza pública cuando su fin es presentar resultados positivos para obtener beneficios y prebendas de la institución militar.

Este fenómeno, conocido ampliamente en el país en los últimos dos años, dio origen a una investigación realizada por la Corporación Jurídica Libertad, ONG de abogados que acompaña procesos jurídicos de algunos desaparecidos forzados de esta región. La investigación, que recoge casos ocurridos entre 2002 y 2006, afirma que en ese periodo se realizaron 218 combates entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales en esta región del Oriente. En esos combates murieron 548 personas, que fueron sepultadas como NN en los cementerios, según concluyeron.

“El 38 por ciento de las personas que el Ejército muestra como abatidos en combate son ejecuciones extrajudiciales contra miembros de la población civil y son reportados en lo que hoy se conoce como falsos positivos”, asegura la abogada Liliana Uribe, quien asiste jurídicamente a 175 víctimas con familiares desaparecidos.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Antioquia conformó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, que recogió 240 casos de ejecuciones extrajudiciales presentadas por el Ejército como ‘positivos’. Según el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, el 60% de estos casos se cometieron en el oriente del departamento, en municipios como Granada, San Francisco, Cocorná y Nariño. Esta información fue procesada por la Fiscalía, entidad que asumió la investigación. Algunos miembros de la Policía y el Ejército ya han sido condenados por esta práctica.

La cantidad de NNs aumentó desde el año 2002, según el Observatorio. Pero no sólo se trataba de falsos positivos, pues también la guerrilla llevaba cuerpos sin identificar a los cementerios y obligaba a los sepultureros a enterrarlos. Ante esta situación, se ha puesto en marcha un proyecto interinstitucional de búsqueda social de personas desaparecidas enterradas en fosas de los cementerios, especialmente el de Rionegro. Este proyecto, en el que participa el PNUD, tiene ya información cierta sobre 18 cuerpos identificados.

39 Instituto Popular de Capacitación. *Que los árboles dejen ver el bosque. Derechos humanos en Antioquia, 2005. Compilación Equipo Observatorio de Derechos y Conflicto Urbano.*

Homicidio y masacres

Desde 2003 se ha presentado una disminución progresiva de los homicidios en la región. Los municipios de Guarne, Rionegro, El Carmen de Viboral y La Ceja, todos ellos de la zona del Altiplano, son los que presentan las tasas de homicidio más altas. El 50% de los homicidios cometidos en la región durante 2008 ocurrieron en estos cuatro municipios (cuadro 3).

Cuadro 3. NÚMERO DE HOMICIDIOS POR MUNICIPIO EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO

MUNICIPIO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Abejorral	33	19	18	14	6	5	1
Alejandro	7	7	4	3	2	0	0
Argelia	17	31	10	3	1	3	0
Cocorná	39	50	15	10	5	2	1
Concepción	13	2	1	1	3	1	1
El Carmen de Viboral	37	37	17	12	11	11	3
El Peñol	25	3	6	6	0	6	0
El Retiro	10	11	9	3	3	3	1
Granada	79	25	17	2	1	5	2
Guarne	26	16	13	10	15	14	3
Guatapé	4	3	2	1	1	2	0
La Ceja	26	24	29	24	20	15	5
La Unión	11	5	14	8	4	6	0
Marinilla	36	17	25	30	12	8	4
Nariño	22	23	23	8	3	2	1
Rionegro	38	33	24	49	31	36	14
San Carlos	61	39	32	17	6	4	0
San Francisco	40	34	7	3	7	0	0
San Luis	16	11	15	4	5	4	1
San Rafael	17	25	17	6	2	4	5
San Vicente	26	15	9	8	5	5	1
Santuario	37	11	12	14	7	3	1
Sonsón	68	45	27	13	10	10	3
TOTAL	688	486	346	249	160	149	47

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional.

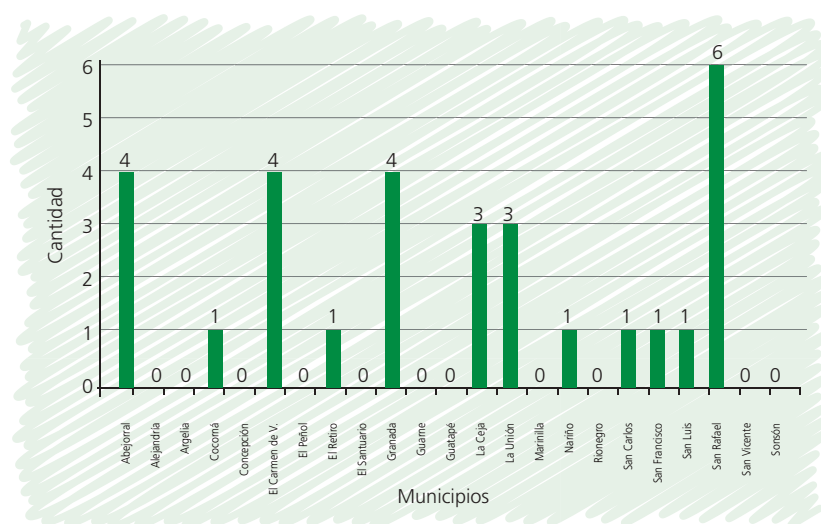


La Mesa de Derechos Humanos resalta que en la información suministrada por las fuentes oficiales no se incluyen los cuerpos no identificados, lo que podría incrementar las cifras iniciales, puesto que no todos esos cuerpos sin identificar corresponden a subversivos dados de baja en combate.

De los 138 homicidios presentados en 2008 en el Oriente Antioqueño según la Gobernación de Antioquia, la Mesa estableció que 30 casos tenían relación con el conflicto armado, es decir, el 21,7% de la cifra general. Entre ellos se presentan casos de homicidios por parte de las Águilas Negras y otros grupos paramilitares; homicidios cometidos por las FARC; ejecuciones extrajudiciales o casos de civiles reportados como dados de baja en combate, entre otros.

Los municipios más afectados en el año 2008 por los homicidios en el contexto del conflicto armado son San Rafael y Granada, de la subregión de Embalses; Abejorral, del Páramo, y El Carmen de Viboral, del Altiplano. Les siguen La Ceja y La Unión, también del Altiplano (gráfico 1).

Gráfico 1. Homicidios relacionados con el conflicto armado en 2008 por municipio



Fuentes: Personerías municipales del Oriente.

Violencia sexual

La violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el acoso sexual y el acceso carnal violento llaman mucho la atención por el alto grado de incidencia que tienen en esta región y que perjudica, sobretodo, a la población infantil, adolescente y femenina.

Durante 2008 se elevaron las denuncias en las instituciones y las voces de los pobladores ante el aumento de la violencia sexual contra las mujeres, según la Mesa de Derechos Humanos.

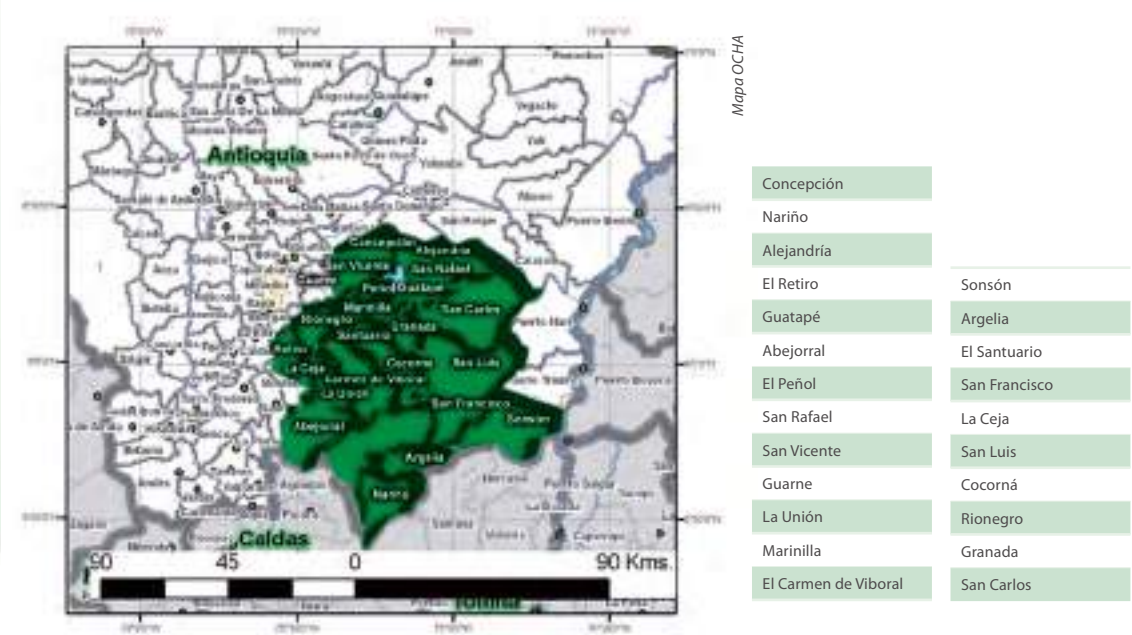
El aumento de violaciones sexuales a mujeres es considerado por la Mesa de Derechos Humanos como uno de los posibles efectos del rearme de grupos paramilitares, específicamente en municipios como La Unión, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla y Santuario. Este último municipio es catalogado como el de mayor número de casos de violencia sexual en esta región del departamento.

En El Retiro y La Unión se reportan también casos de violencia sexual contra las mujeres, asociados a la delincuencia común. La mayoría de hechos han ocurrido en zonas rurales y la población presume que en algunos casos son responsabilidad de desmovilizados del paramilitarismo. La mayor parte de casos quedan en el silencio. Las personerías municipales han corroborado el registro de numerosos casos de violencia intrafamiliar en las comisarías de familia.

La desaparición forzada

La desaparición forzada ha sido una de las expresiones más frecuentes de la guerra sucia en esta región. Entre 1981 y mayo de 2008 fueron registradas 601 personas desaparecidas de manera forzada, según el CTI de la Fiscalía (cuadro 4).

Municipios del Oriente Antioqueño donde se ha presentado la desaparición forzada

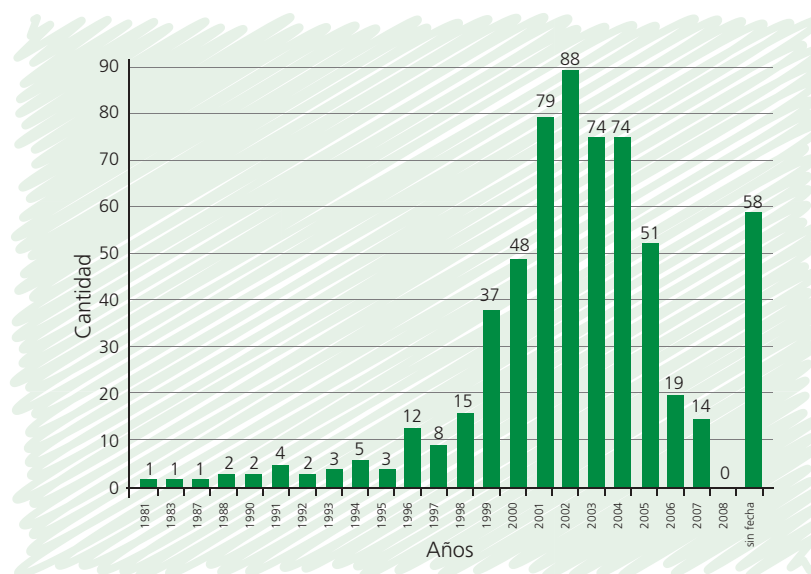


Cuadro 4. Desaparecidos por municipios entre 1981 y mayo de 2008		
Municipio	Cantidad	Porcentaje
Concepción	1	0,2%
Nariño	3	0,5%
Alejandro	5	0,8%
El Retiro	5	0,8%
Guatapé	5	0,8%
Abejorral	6	1,0%
El Peñol	9	1,5%
San Rafael	12	2,0%
San Vicente	12	2,0%
Guarne	15	2,5%
La Unión	17	2,8%
Marinilla	18	3,0%
El Carmen de Viboral	19	3,2%
Sonsón	20	3,3%
Argelia	24	4,0%
El Santuario	32	5,3%
San Francisco	36	6,0%
La Ceja	37	6,2%
San Luis	38	6,3%
Cocorná	44	7,3%
Rionegro	55	9,2%
Granada	81	13,5%
San Carlos	107	17,8%
Total	601	100,0%

Fuente: CTI de la Fiscalía.

En los últimos años este fenómeno ha disminuido, sin embargo aún se presentan casos, lo que es preocupante (gráfico 2). Según fuentes oficiales, en el 2008 se presentaron cero casos de desaparición forzada (gráfico 2), sin embargo la Mesa de Derechos Humanos constató en las personerías de los municipios la desaparición forzada de 16 personas en ese año, con lo cual la curva asciende en ese año. Se presume que los cuerpos de varias de estas personas fueron arrojados a los ríos.

Gráfico 2. Cifras de desaparecidos por años 1981-2008



Fuente: Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente antioqueño con base en datos oficiales.

Algunos de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada han sido rescatados a partir de la conformación de grupos de identificación de personas y búsqueda de desaparecidos en todas las seccionales de la Fiscalía en el país.

El Grupo de Identificación de Personas y Búsqueda a Desaparecidos (GIPBDES), del CTI de la Fiscalía en Medellín, ha exhumado cerca de 467 cadáveres en toda Antioquia desde 1994, año en que iniciaron diligencias en terreno, hasta mayo de 2008. De esta cantidad, 116 cadáveres fueron recuperados en el Oriente antioqueño. No obstante, no todos han sido identificados plenamente. Esto se debe en parte a que algunas autoridades judiciales ordenaron las exhumaciones con poca información del contexto de los hechos, de los victimarios, las víctimas y los familiares con quiénes cotejar pruebas de ADN de los cuerpos recuperados.

Entre los meses de enero y junio de 2008 este Grupo de Identificación recuperó 30 cuerpos de fosas comunes ubicadas en diversos lugares de la geografía del Oriente de Antioquia, mientras que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía recuperó 39 en el mismo periodo. Al menos 25 de esos cuerpos ya han sido identificados.



En la actualidad, las instituciones cuentan con respaldo político para fomentar las investigaciones de la antropología forense y por eso trabajan para mejorar los métodos de identificación que permitan identificar los sitios donde reposan todos los cuerpos de los desaparecidos.

Además de los señalados, en el Oriente antioqueño hay 2.539 cadáveres sin identificar (NN) de víctimas del conflicto armado, que han sido registrados e inhumados en cementerios entre enero de 1985 y junio de 2008⁴⁰.

La búsqueda de los desaparecidos se ha hecho aún más difícil debido al fenómeno de la re-desaparición, que se presenta cuando los victimarios desentierran a sus víctimas, dispuestas en fosas comunes, y cambian su lugar de entierro para eliminar el rastro del crimen. Además, los administradores de los cementerios no han hecho un manejo adecuado de la situación. Al cumplir los cuatro años de sepultado el NN realizan las exhumaciones y depositan los restos en fosas comunes.

Desplazamiento forzado

Durante los últimos años, las subregiones del Oriente antioqueño y Urabá han sido las zonas más expulsoras de población en el departamento. A medida que el conflicto se fue trasladando de Urabá hacia el Oriente, esta última subregión se constituyó en la generadora del mayor número de desplazados.

Municipios del Oriente antioqueño donde se ha presentado el desplazamiento forzado

Concepción	
Nariño	
Alejandro	
El Retiro	Sonsón
Guatapé	Argelia
Abejorral	El Santuario
El Peñol	San Francisco
San Rafael	La Ceja
San Vicente	San Luis
Guarne	Cocorná
La Unión	Rionegro
Marinilla	Granada
El Carmen de Viboral	San Carlos



40 Revista La Posada, (8), enero de 2009. Segundo Laboratorio de Paz, Oriente antioqueño.

Según el Sistema Único de Registro (SUR) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, durante el periodo de 2000 a 2005 el Oriente antioqueño expulsó 99.438 personas y, a su vez, recibió 59.390 personas. Los años más críticos correspondieron al periodo 2000-2003, cuando se registró el mayor número de población obligada a desplazarse.

En el plano de la subregión, los municipios de la zona de Embalses son los mayores expulsores de población hacia Medellín. San Carlos, por ejemplo, presenta entre 2000 y 2005 la situación más crítica del departamento con un registro de 9.942 personas expulsadas en los últimos seis años, sin contar las más de 4.000 que han llegado a los municipios del Altiplano, tales como Marinilla, Rionegro y La Ceja. Le siguen en orden descendente otros tres municipios: Granada con 5.572 expulsados, San Luis con 4.412 y Cocorná con 4.297, según las estadísticas oficiales. Más de la mitad de sus poblaciones están asentadas en otros cascos urbanos y hay veredas enteras abandonadas o minadas, poniendo en riesgo la vida de los pocos habitantes que todavía quedan (cuadro 5).

Si esos fueron los municipios de donde más habitantes salieron, los que más población desplazada recibieron fueron, entre 2003 y junio de 2009, San Francisco, San Carlos, Sonsón, Rionegro y Nariño (cuadro 6).

El desplazamiento forzado suele ir asociado a otros crímenes de lesa humanidad o violación de los derechos humanos. Según los registros de la Personería de Medellín, la mayoría de personas que ingresan a la ciudad explican la causa de su condición de desplazadas por los asesinatos que se vienen cometiendo en sus regiones de origen, por la expropiación de tierras, por la negativa de los campesinos de unirse a las filas de los actores armados ilegales o por señalamientos de que hacen parte de grupos armados.

Este complejo proceso de desplazamiento, en su mayoría selectivo y político, ha afectado de manera profunda los procesos de liderazgo y de construcción de sociedad en el Oriente antioqueño, con el asesinato, el desplazamiento o las amenazas de líderes políticos, religiosos, sociales, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y de la población civil.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo de Antioquia, quienes llegaron a Medellín en 2005 fueron agricultores (1.621) y de otros oficios pequeños pero relacionados con el campo; amas de casa (1.681) y un significativo grupo de niños y jóvenes (2.129), quienes al arribar a la ciudad no encontraron espacios reales para insertarse social, cultural y económicamente.

El estudio de Pastoral Social y la Universidad de Antioquia Desplazamiento forzado en Antioquia, realizado en 2001, refleja como principales perpetradores de los desplazamientos a los grupos paramilitares, seguidos en menor medida por la guerrilla y en una pequeña parte por el Ejército. Las principales acciones que condujeron a los desplazamientos fueron enfrentamientos armados, incursiones paramilitares, masacres y tomas guerrilleras.



Cuadro 5. DESPLAZAMIENTO FORZADO (POR EXPULSIÓN) EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO								
MUNICIPIO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero-junio 2009	Total general
Abejorral	421	519	305	268	223	189	23	1.948
Alejandro	154	32	45	32	39	27	15	344
Argelia	1.058	971	3.116	2.266	388	316	7	8.122
Cocorná	1.491	1.809	841	428	462	196	14	5.241
Concepción	122	31	23	7	14	13	0	210
El Carmen de Viboral	657	301	241	149	201	107	26	1.682
El Peñol	529	98	112	63	82	21	6	911
El Retiro	17	9	24	22	7	12	2	93
Granada	1.882	1.638	770	443	253	233	22	5.241
Guarne	11	41	51	58	16	14	0	191
Guatapé	19	24	14	7	12	3	0	79
La Ceja	65	61	56	41	88	63	1	375
La Unión	127	72	88	60	85	60	8	500
Marinilla	66	84	83	48	83	70	30	464
Nariño	571	615	975	2.309	827	322	38	5.657
Rio Negro	43	43	51	40	79	44	11	311
San Carlos	2.299	1.542	1.096	626	343	231	42	6.179
San Francisco	4.809	2.255	428	210	299	145	17	8.163
San Luis	908	650	367	213	208	105	42	2.493
San Rafael	404	1.229	441	359	296	363	38	3.130
San Vicente	110	100	110	47	72	58	15	512
Santuario	192	162	105	49	50	48	11	617
Sonsón	1.861	1.012	942	902	792	550	116	6.175
Total por año	17.816	13.298	10.284	8.647	4.919	3.190	484	58.638

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional.

**Cuadro 6. MUNICIPIOS RECEPTORES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO**

Municipio	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero- junio 2009	Total
Abejorral	129	176	112	96	85	73	14	685
Aleandría	72	34	41	38	31	20	8	244
Argelia	779	473	2.404	1.840	148	164	20	929
Cocorná	502	742	169	150	280	96	44	1983
Concepción	79	13	23	17	0	8	16	156
El Carmen de Viboral	406	263	244	166	183	58	8	2.139
El Peñol	318	58	27	263	16	17	16	715
El Retiro	16	26	46	58	21	88	0	255
Granada	500	388	159	162	124	160	7	1500
Guarne	22	89	99	60	100	47	21	438
Guatapé	20	6	19	3	6	13	0	67
La Ceja	379	361	247	200	186	126	22	1.521
La Unión	223	99	94	110	100	57	59	742
Marinilla	293	345	145	144	142	124	52	1.245
Nariño	283	127	202	1.464	105	38	0	2.219
Rionegro	702	750	587	513	371	255	64	3.242
San Carlos	3.301	703	167	243	78	112	5	4.609
San Francisco	2.730	1.521	337	58	196	61	2	4.905
San Luis	1.382	495	109	117	147	170	32	2.452
San Rafael	183	896	144	127	138	228	21	1737
San Vicente	58	14	22	29	26	16	11	176
Santuario	155	149	53	39	57	28	14	495
Sonsón	1.072	476	537	531	460	346	26	3.448
Total por año	13.604	8.204	5.987	6.428	3.000	2.305	462	39.990

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Datos Policía Nacional.



La mayoría de las víctimas de estos desplazamientos han sido campesinos, quienes se han albergado en las cabeceras urbanas de municipios como Sonsón, Argelia, La Ceja, La Unión y, sobre todo, en San Rafael⁴¹.

Los desplazamientos masivos de la población están en directa relación con la presencia de grupos paramilitares, en especial las Autodefensas de Córdoba y Urabá, a partir de 1997. “Pero también se registran casos de desplazamientos que obedecen a la situación de terror producida por los combates entre la guerrilla y el Ejército, así como por los bombardeos”⁴².

Debido al desplazamiento masivo, la ocupación de la población rural cambió significativamente. Numerosos pueblos quedaron abandonados. En Cocorná, por ejemplo, la población mermó en el 70%, según la Defensoría del Pueblo. Aún hoy, muchas veredas siguen deshabitadas en la región.

El desplazamiento en el Oriente antioqueño tiene la particularidad de que no ha ido acompañado de un fenómeno ampliamente generalizado de usurpación de tierras, como ha ocurrido en otras regiones como los Montes de María. La mayoría de las tierras abandonadas que han sido nuevamente ocupadas hacen parte del reacomodamiento de campesinos sin tierra o desplazados que trabajan para producir su sustento.

Al mismo tiempo, muchas de las parcelas que permanecen desocupadas han sido sembradas por la guerrilla con minas antipersonal, lo que se convierte en un obstáculo para el retorno de sus propietarios o poseedores.

En los últimos años se ha presentado un agravante al desplazamiento forzado: las amenazas de los actores armados a las víctimas para que no se registren como desplazadas.

El retorno de la población desplazada

El Oriente de Antioquia es una de las regiones priorizadas por el Gobierno nacional en su política “Retornar es vivir”. Según Acción Social, cerca de 68.000 hogares han retornado al Oriente antioqueño en los últimos cinco años. De ellos, 11.480 hacen parte de este programa gubernamental priorizado en los municipios de Granada, San Francisco, San Carlos, San Rafael, Cocorná y San Luis.

El Gobierno se ha propuesto garantizarle a estas familias el goce efectivo de derechos, para lo cual hay grandes desafíos. Algunos de ellos son: la recuperación de sus activos perdidos y su capacidad productiva, el mejoramiento de la infraestructura deteriorada, la identificación de su relación con los predios abandonados y la formalización de los títulos correspondientes; la protección en salud; el acceso a la educación, un enfoque diferencial en la atención, así como el restablecimiento de su tejido social.

⁴¹ Uribe de Hincapié, María Teresa (directora de investigación). *Op. cit.*

⁴² *Ibidem.*

A San Carlos han regresado 2.200 familias. De ellas, 1.184 han sido atendidas por el Gobierno nacional. “Muchos otros quieren regresar, pero la capacidad institucional está copada”, dice Patricia Giraldo, personera municipal.

A su vez, alrededor de 42.000 familias desplazadas han retornado sin ayuda pues no fueron aceptadas en los registros de población desplazada de Acción Social, según organizaciones sociales.

La situación de las familias víctimas de desplazamiento forzado es hoy una de las mayores preocupaciones de la región, especialmente de aquellas que han retornado sin el acompañamiento del Estado. Organizaciones sociales expresan que entre muchas familias retornadas hay hambre y no encuentran condiciones que les permitan generar ingresos.

“Mucha gente está regresando, más por ayuda de la comunidad que del Estado”, afirma Gloria Ramírez, de la Asociación de Víctimas de Granada (Asovida). Dice además que el retorno se está haciendo sin que se garantice que no habrá minas en sus tierras. “La gente asume el riesgo. La dignidad es otro caso. La gente llega a la finca, la encuentra en ruinas y se queda viviendo en esas condiciones porque no tiene otra opción”, concluye Ramírez.

Además de los seis municipios priorizados por el Gobierno para el retorno, la Red de Asocomunales de Oriente señala que hay otros municipios con urgencia de planes de retorno, como Argelia, que no fue incluido por el Gobierno pues no cuenta con la certificación de seguridad del Ejército Nacional. Sin embargo, ante la urgencia de las familias de regresar a sus predios, 150 de ellas regresaron bajo su propio riesgo, con el apoyo de la administración municipal.

Aunque las familias están altamente interesadas en retornar, se han organizado para este fin y el Gobierno dice que los retornos en el Oriente son un ejemplo para el país⁴³, en muchos casos no se han dado las condiciones de seguridad que lo hagan posible.

Minas antipersonal y desminado humanitario

Antioquia ha sido el departamento más afectado por el uso de minas antipersonal entre 1990 y junio de 2009, según el Programa Presidencial contra Minas Antipersonal. A su vez, registra 2.841 eventos ocasionados por estas minas –el mayor número en el ámbito nacional–, que han dejado 1.733 víctimas (cuadro 7).



43 Molano Aponte, Diego (director de Acción Social). Op. cit.

Cuadro 7 . EVENTOS (ACCIDENTES E INCIDENTES) POR MAP Y MUSE EN ANTIOQUIA

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Antioquia	329	485	348	381	220	259
Total nacional	1.446	2.021	1.756	2.126	1.992	1.360
Participación	23%	24%	20%	18%	11%	19%

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República.

La situación más grave se ha presentado en la región del Oriente. Entre 1990 y junio de 2009 –según la misma fuente– han ocurrido 556 eventos (incidentes y accidentes) por minas, que han dejado 356 víctimas. El primer caso se presentó en 1995 en Cocorná, pero su uso comenzó a aumentar progresivamente a partir de 2002, como una estrategia de la guerrilla al retirarse de territorios donde habían sido doblegados por la presión del Ejército. Como respuesta a la acción de la fuerza pública, la guerrilla se replegó e incrementó el uso de minas como una forma de contener la avanzada militar.

En los últimos años, tres municipios –San Carlos, San Luis y San Francisco– han tenido el panorama más crítico por la cantidad de minas sembradas en su territorio. También Argelia, Sonsón, Granada y Cocorná se han visto seriamente afectados por este fenómeno.

Según diferentes sectores –entre ellos el de las fuerzas militares– hay una relación entre los cultivos ilícitos y la presencia de minas antipersonal y munición sin explotar, ya que los grupos armados ilegales estarían usando estos artefactos para proteger sus negocios ilícitos.

El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de desminado humanitario teniendo en cuenta que una de las principales dificultades que se han presentado para el retorno de la población desplazada a sus parcelas y fincas es que, tras el abandono, muchas de ellas han sido minadas por las FARC.

El desminado humanitario se ha concentrado principalmente en el municipio de San Francisco, donde la Compañía de Desminado Humanitario del Ejército encontró, en el primer semestre de 2008, 8.048 desechos metálicos de munición y 19 artefactos explosivos.

Esta es tarea lenta y costosa y en Antioquia requiere de gran atención por ser el departamento que presenta el panorama más complejo en materia de campos minados. El Oriente antioqueño, además, es la región más afectada del departamento.

Mientras el proceso de desminado en San Francisco ya concluyó en la vereda El Boquerón, aún continúan labores en El Jardín y Rancho Largo. Asimismo, ya comenzó el desminado en San Carlos, pero en Cocorná y Argelia las autoridades locales aún esperan dar inicio a este proceso para hacer posible el acceso de los campesinos a sus tierras.

En términos generales, el siguiente cuadro indica, en cifras, algunos de los impactos principales que tiene el conflicto armado en la población (cuadro 8).

Cuadro 8. INDICADORES DE IMPACTO DE CONFLICTO EN POBLACIÓN DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Enero-junio 2009
Homicidios	688	486	346	249	160	149	0
Casos masacres	3	6	1	0	0	0	0
Homicidios de alcaldes y ex alcaldes	0	0	1	0	0	0	0
Homicidio de concejales	3	0	0	0	1	0	0
Homicidio de indígenas	0	0	0	0	0	0	0
Secuestros	70	42	4	6	8	2	0
Desplazamiento (expulsión)	17.816	13.298	10.284	8.647	4.919	3.190	284
Desplazamiento (recepción)	13.604	8.204	5.987	6.428	3.000	2.305	462
Minas/Muse (eventos-víctimas)	62	103	96	53	32	12	111
Acciones armadas (ataques, hostigamientos, emboscadas, etc.)	19	26	13	5	11	5	0
Contactos armados	56	193	118	93	94	20	4

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, diciembre de 2009.

5. Escenarios posibles y tendencias

La difícil situación humanitaria tiende a continuar

- ▶ Aunque tanto el Estado como las organizaciones sociales están trabajando por el retorno de la población desplazada, la cantidad de familias que se encuentran en este proceso desborda las posibilidades de atención a toda la población. Tampoco hay condiciones en la región para la generación de ingresos de todas estas familias. La población de la subregión de Embalses apenas se acomodaba a su nuevo estilo de vida y formas de producción y ahora no cuentan ni con la tierra ni con la infraestructura a la que se acomodaban.
- ▶ Estas acciones de retorno continúan, pero organizaciones sociales han manifestado que se presentan problemas de seguridad que no garantizan las condiciones adecuadas para este proceso.

- ▶ En la actualidad hay alerta por el hambre que padecen las familias en situación de desplazamiento forzado, pues no cuentan con las condiciones para mejorar de manera urgente su condición.
- ▶ El desminado humanitario es un proceso lento porque requiere de un gran cuidado para evitar el sacrificio de vidas. Por esta razón, la gran cantidad de campos minados que hay –especialmente en las subregiones de Embalses, Bosques y Páramo, a donde gran parte de la población desplazada está esperando retornar– prolongará su espera y su proceso de adaptación a las formas de producción que le permitan producir ingresos.
- ▶ La presencia de actores armados, como las estructuras emergentes, representan un riesgo para la población, así como para las organizaciones e instituciones del Estado. Sus hostigamientos a la población continúan dejando víctimas, particularmente líderes sociales.

Procesos hacia el restablecimiento de la población y garantías de los derechos de las víctimas

- ▶ Aunque la violencia aún hace presencia en el territorio y los actores armados no dejan de crear un ambiente de hostilidad, la reacción de la sociedad civil en esta región es muy fuerte. Sus acciones mejoran las condiciones que hacen posible el restablecimiento de la población.
- ▶ Varios aspectos impulsan el restablecimiento de las condiciones de vida que los pobladores tuvieron en el Oriente antioqueño antes de la arremetida de los grupos armados: la reconstrucción del tejido social, las iniciativas locales de movilización social por la recuperación del Estado social de Derecho, el resurgimiento de proyectos productivos y la planeación participativa del territorio, así como la valiosa cultura democrática que se ha impulsado desde el proceso constituyente y las experiencias organizativas que le precedieron.
- ▶ También tiende a seguir el trabajo para la garantía y protección de los derechos de las víctimas. Mientras las víctimas se han asociado en organizaciones sociales fuertes, que han desarrollado una importante labor en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, otras organizaciones se han preparado para dar apoyo psicosocial a las víctimas y acompañarlas en la gestión por la satisfacción de sus derechos. Existe el temor de que la respuesta del Estado, que no alcanza a cubrir las necesidades y expectativas, termine por crear situaciones de frustración y revictimización.

Se reafirma la intervención cívico-militar

- ▶ Si bien el Oriente es reconocido por su movilización social con miras a la construcción del Estado social de Derecho y ha dado grandes pasos en la construcción de su ciudadanía y en la planeación participativa del desarrollo, la tendencia que se configura actualmente es a continuar la definición de las prioridades del desarrollo en el marco de la política de recuperación social del territorio.
- ▶ La puesta en marcha de la recuperación social del territorio ha planteado una manera de definir la inversión del presupuesto público que, según las organizaciones sociales, no se ajusta a los procesos sociales de la región y a los procedimientos establecidos para una real gobernabilidad.
- ▶ Uno de los aspectos que preocupa al convertir a las fuerzas militares en uno de los actores de la ayuda humanitaria y el desarrollo es que estas acciones respondan a criterios de la estrategia militar. El camino al desarrollo es, por definición, un proceso que toma distancia de los instrumentos, las normas y las disciplinas y estrategias de la guerra.
- ▶ Frente a la tendencia a reafirmar la intervención cívico-militar, actores sociales del Oriente de Antioquia consideran que esto puede ir en contravía del restablecimiento de las condiciones mínimas de la sociedad, ya que la recuperación integral implica la construcción de sujetos políticos y sociales, el mejoramiento de las condiciones de vida y el respeto por los derechos humanos. Pero, además, significa generar condiciones para que exista una movilización social, aunque en la región el Ejército ha en algunos casos estigmatizado a los líderes sociales al señalarlos de tener alianzas con la guerrilla.

La presencia de los actores armados tiende a continuar

- ▶ Continúa el fenómeno de los grupos emergentes. La población relata que todavía persiste el temor, en especial en los municipios más afectados por la violencia, como los del Oriente lejano. Por eso, las organizaciones sociales consideran que la tendencia es a la permanencia y reactivación tanto de los grupos de la guerrilla como de las estructuras emergentes. Las acciones violentas que se han presentado en los últimos meses indican que siguen actuando los actores armados.
- ▶ Si bien han disminuido las violaciones a los derechos humanos, se siguen presentando, entre ellas las detenciones arbitrarias.
- ▶ La población local considera que la injerencia paramilitar denunciada en las jornadas electorales de los últimos años se puede convertir en presión hacia los

gobernantes actuales y las elecciones locales del próximo año. Un escenario que podría presentarse es la incidencia paramilitar en los presupuestos municipales, entre otros.

- ▶ Es necesario poner atención al reclutamiento de jóvenes, tanto por parte de los grupos armados como del narcotráfico, un fenómeno que se muestra en ascendencia.
- ▶ Es una prioridad atender la violencia sexual contra las mujeres, que ha aumentado en los últimos años según testimonios de las comunidades.
- ▶ Las aún preocupantes cifras de desplazamiento forzado de la población campesina obligan a tomar medidas que protejan a las familias en sus minifundios y les posibiliten la permanencia en sus predios.

La gobernabilidad, entre los movimientos cívicos y la presión armada

- ▶ A lo largo de la historia de la política del Oriente antioqueño, con fenómenos cívicos tan relevantes como el Movimiento Cívico del Oriente y la Asamblea Provincial Constituyente, hoy, 40 años después, el escenario político muestra un panorama muy valioso pero con pocas posibilidades de producir los cambios sociales profundos que en un principio se trazaron.
- ▶ La época de oro de estos movimientos, que en Marinilla llegaron a elegir dos alcaldes cívicos, fue acabada por la arremetida armada contra los líderes de los movimientos comunitarios y políticos que aspiraban a una gran transformación ética, política, económica y social del territorio. Hoy, si bien el movimiento social es bastante activo en la vida cotidiana de los municipios, paradójicamente en la vida electoral se mantiene una alta influencia de los partidos hegemónicos. Por esto, las transformaciones pensadas desde los grupos sociales no logran llegar a convertirse en política pública.

Benjamín Cardona Arango, representante de la Asamblea Provincial Constituyente, afirma:

“No se ven grandes avances en términos de buen gobierno. No se avanza en la superación del clientelismo ni en los procesos electorales, ni en la elección de funcionarios. Se aceptan de palabra los aportes comunitarios para los programas de gobierno y los planes de desarrollo pero luego no se respaldan con presupuestos efectivos. Tampoco la ciudadanía tiene el poder necesario para hacer un control efectivo sobre la gestión”.

Esto se observa también en los procesos electorales de la última década, en los cuales los miembros de los movimientos cívicos han apoyado a los partidos tradicionales en la elección de sus mandatarios locales.

6. Identificación de caminos a seguir

Transformación de conflictos, cultura de paz, prevención y mitigación de efectos del conflicto

- ▶ Los esfuerzos de la población del Oriente por construir una planeación colectiva del desarrollo regional, que se consolidaron con el II Laboratorio de Paz, son uno de los recursos más valiosos para el desarrollo humano de esta región. Tras la finalización del II Laboratorio hace más de un año, hoy se hace muy importante fortalecer las iniciativas exitosas allí creadas.
- ▶ El camino hacia el desarrollo humano implica recuperar el sentimiento de identidad de la región y el empeño por la construcción del propio desarrollo que aún persisten en el imaginario de su gente. Por esto, es importante trabajar para apoyar la recuperación de la identidad territorial y a las organizaciones sociales e institucionales que le apuestan a la creación colectiva de iniciativas para el desarrollo local.
- ▶ Es necesario apoyar los esfuerzos para la observación sistemática del contexto y de las dinámicas del conflicto, entre otras herramientas que permitan una intervención adecuada en el territorio. Asimismo, hacer un análisis permanente sobre las apuestas territoriales de paz, con el aporte de la visión de construcción de paz en los aspectos que puedan ser útiles para el Oriente de Antioquia.
- ▶ Hay que impulsar la articulación de las redes temáticas y territoriales que trabajan en pos de la paz para crear horizontes compartidos en la búsqueda del desarrollo humano y la construcción de paz, así como proteger las dinámicas sociales del territorio que la propician.
- ▶ Para lograr una visión compartida de los conflictos en el territorio y de sus horizontes de solución, es importante apoyar las iniciativas y redes de comunicación con alcance regional y con enfoque de desarrollo humano. De esta manera se debe conseguir el cambio de la imagen territorial afectada por la guerra y sus consecuencias, para que empiece a existir en la gente la percepción de un terri-

torio que se recupera mediante el dinamismo social, y se visibilicen las nuevas apuestas territoriales y los nuevos polos de desarrollo local.

- ▶ De igual forma, es importante contribuir a la reflexión sobre la intervención de las instituciones del Estado y las organizaciones sociales, así como de la cooperación internacional, para asegurar que esta represente una solución adecuada al contexto. Para que así sea y se eviten perjuicios, un camino a seguir sería la formación de los miembros de estas entidades en el conocimiento de “Acción sin Daño”.
- ▶ Como herramienta para la toma de decisiones y mecanismo de prevención, es importante fortalecer las capacidades de análisis y planeación sensible a los conflictos de actores estratégicos del territorio y, en tal sentido, facilitar procesos de formación e intercambios de experiencias entre los diferentes sistemas de observación sobre los conflictos y activos de paz que hay en el territorio.
- ▶ Hay que apoyar la política departamental que propende por el desarrollo de los jóvenes y la prevención de su vinculación a los grupos armados ilegales así como a las actividades productivas en economías ilícitas. A su vez, es prioritario alentar los esfuerzos para la reintegración comunitaria de los jóvenes desmovilizados de grupos armados ilegales, con miras a lograr la recuperación de sus capacidades productivas.
- ▶ Se requiere apoyar liderazgos e iniciativas de emprendimiento de los jóvenes para impulsar una cultura de paz y nuevos referentes de vida, que les permitan, a su vez, prevenir el reclutamiento de los grupos armados ilegales.
- ▶ Hay que trabajar para disminuir el riesgo de la población por la presencia de minas antipersonal y munición sin explotar a través del fortalecimiento de las instituciones del Estado encargadas de la educación en riesgo de minas y la asistencia a las víctimas.
- ▶ Es prioritario apoyar las iniciativas de las organizaciones de mujeres en su papel de reconstruir el tejido social y crear lazos de solidaridad y apoyo a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, hay que abrir caminos para incrementar la incidencia de las organizaciones de mujeres en los espacios de construcción de políticas públicas.

Verdad, justicia, reparación y derechos humanos

- ▶ Es menester fortalecer las organizaciones de víctimas, así como a las organizaciones que las apoyan y a las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

- ▶ Se requiere mejorar las condiciones y los mecanismos de acceso a la justicia para que las víctimas hagan efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en el marco del Estado de Derecho.
- ▶ Hay que contribuir a la implementación de la justicia basada en género, para mejorar las rutas de prevención, atención y acceso a la justicia de las mujeres y niñas.
- ▶ Es necesario impulsar ejercicios de expresión del dolor y reconocimiento de las víctimas como parte de los procesos de reconstrucción de la memoria, que siembren las bases para el restablecimiento emocional de las víctimas y la recuperación de sus capacidades de interacción social.
- ▶ Hay que promover iniciativas que trabajan por los derechos humanos, con programas formativos que les permitan hacer una importante labor de incidencia ante las instituciones encargadas de garantizarlos.
- ▶ La situación del Oriente ha demostrado la necesidad de promover el trabajo de la Mesa Regional de Derechos Humanos y su articulación con los medios de comunicación y la juventud para consolidar sus alianzas estratégicas en la formación de una cultura respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, se exige impulsar el progreso del sistema regional de planeación (Sirpaz), como una herramienta útil para el territorio en la vigilancia de la garantía plena de los derechos humanos.

Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz

- ▶ Hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad, es preciso transformar las acciones que hicieron prevalecer la imposición por encima de la concertación y encaminarlas en dirección a la propuesta de desarrollo humano.
- ▶ Para hacer viable la planeación colectiva, es importante dar soporte a los proyectos que el territorio ha definido colectivamente como estratégicos para su desarrollo. En ese sentido, es necesario tener en cuenta los rumbos ya trazados en el proyecto estratégico regional (PER) y los proyectos estratégicos territoriales (PET).
- ▶ En la actualidad se presenta un escenario de planeación colectiva, el Plan estratégico del Oriente antioqueño (Planeo), al que los actores de paz de la región le han puesto un gran empeño. Un camino a seguir para fortalecer esa trayectoria de participación ciudadana es el apoyo a este proceso.
- ▶ En el Oriente antioqueño hay una gran cantidad de experiencias adquiridas en busca de la paz por numerosos procesos y proyectos locales, nacionales e internacionales, y por las múltiples redes sociales con que cuenta la región. Esto ha



sido posible, a pesar de que la toma de decisiones desde los centros de poder económico y político del país en algunas ocasiones han inhibido el empoderamiento de la ciudadanía. El desafío ahora es lograr la voluntad política para la articulación de todos los actores en el territorio con miras a hacer efectiva una apuesta estratégica de paz.

- ▶ Para que esta apuesta de desarrollo y paz sea sostenible, es preciso que, además de ser asumida por los procesos comunitarios y las redes sociales, sea convertida en política pública mediante decretos, ordenanzas, acuerdos o leyes de la República. Por esto, es necesario vincular la institucionalidad y los Gobiernos en una propuesta de desarrollo local.

Desarrollo social y económico sostenible para la paz

- ▶ En el marco de la apuesta por el desarrollo humano y la paz, es necesario trabajar por el desarrollo económico sostenible. El primer paso en este camino es abrir espacios para el debate acerca del modelo de desarrollo y la vocación económica del territorio, teniendo en cuenta que una de las causas de conflicto en el Oriente antioqueño ha sido la construcción de megaproyectos de desarrollo que han generado la ruptura de identidades y han afectado seriamente la cultura local. Ahora, es preciso armonizar el interés de los megaproyectos con el de las comunidades, una tarea difícil pero no imposible de lograr, que requiere metodologías comunitarias y espíritu de concertación. Es decir, pasar de los proyectos a los procesos territoriales.
- ▶ Este proceso de búsqueda del desarrollo local sostenible debe ser continuo, sistemático, sostenible, integral e integrador, democrático y participativo, y que armonice los recursos propios y los externos, con conexión entre sí y con el mundo.
- ▶ Para la sociedad, es una prioridad promover alternativas de desarrollo socioeconómico que mejoren las condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos vulnerables. Además, se exige fomentar el desarrollo de procesos educativos y de formación para el trabajo, que abran nuevos horizontes productivos a la población y les permitan mejorar sus ingresos.
- ▶ Impulsar la articulación de las asociaciones locales y subregionales para el desarrollo productivo, con el fin de contribuir a optimizar sus recursos, es otra prioridad identificada en el Oriente. También se pide apoyar la interrelación entre los sectores productivos de la región, entre ellos el sector del turismo, las cooperativas, las alcaldías, las cadenas productivas y las redes sociales, como agentes importantes del desarrollo.

- ▶ Hay que contribuir a construir una visión de desarrollo regional que vincule nuevos actores a la propuesta y fortalecer la capacidad técnica de los entes correspondientes, con el fin de hacerle seguimiento a los procesos productivos y tomar correctivos en forma oportuna.
- ▶ De la misma forma, hay que impulsar la fase de implementación de un proyecto con mujeres víctimas en los municipios de Marinilla y Sonsón, en donde participan varios actores, entre ellos la Gobernación de Antioquia, Prodepaz, Adeproa y el PNUD. Además de lo productivo se quiere acompañar con formación humana, en derechos humanos y ciudadanía.

El propósito de la estrategia
ART - REDES es promover
condiciones y ambientes propicios a la
búsqueda de la paz en Colombia.

En estos años de trabajo, la intervención territorial
se ha focalizado en los Montes de María, Meta, Oriente
Antioqueño, Nariño y Huila y Piedemonte Amazónico. Desde
el 2009, también está en Cesar.

Son cuatro los ejes de esta estrategia, que hacen referencia a las
cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo humano:

- Prevención y transformación de conflictos y promoción de una cultura de paz
- Justicia, derechos de las víctimas y derechos humanos
- Gobernabilidad, democracia local y construcción de paz
- Desarrollo socioeconómico sostenible para la paz

